

# La pedagogía de la justicia de menores: sobre una justicia adaptada a los menores\*

## *The pedagogy of juvenile justice: a child-friendly justice*

Dra. María José BERNUZ BENEITEZ. Profesora Titular. Universidad de Zaragoza ([mbernuz@unizar.es](mailto:mbernuz@unizar.es)).

Dra. Esther FERNÁNDEZ MOLINA. Profesora Titular. Universidad de Castilla-La Mancha ([esther.fdez@uclm.es](mailto:esther.fdez@uclm.es)).

### Resumen:

Este artículo ahonda en las oportunidades educativas que ofrece el propio proceso judicial, cuando un joven ha cometido una infracción penal. Siendo conscientes de que la respuesta se produce en un entorno poco amigable para la adolescencia, en este texto se señalan aquellos elementos que legitiman este sistema de justicia y hacen que los menores lo puedan percibir como justo y adecuado para responder a su comportamiento delictivo. Partiendo de que el paso por el procedimiento penal puede ser una experiencia de socialización legal para los menores y precisamente para que la acción pedagógica de la justicia surta efecto, se reivindica no solo la necesidad de un castigo esencialmente educativo y responsabilizador, sino también de unos profesionales debidamente formados que promuevan la participación del

joven en el procedimiento y mejoren su competencia legal. Solo así será posible que la experiencia judicial vivida por los menores infractores sea percibida positivamente y suponga una oportunidad de aprendizaje que mejore las actitudes de aquellos hacia la ley y el sistema. En definitiva, se propone una reflexión sobre la importancia de la acción pedagógica que la justicia de menores despliega a lo largo de todo el procedimiento y de cómo su éxito logra legitimar la intervención de un sistema penal especializado y favorecer que el menor entienda y acepte su sentido educativo.

**Descriptor:** justicia de menores, legitimidad, pedagogía, justicia accesible, participación, justicia adaptada al menor, percepciones de justicia.

\* Este trabajo se enmarca en el desarrollo de dos proyectos de investigación que han recibido financiación pública: «Ciudadanos y justicia penal. Un análisis de la opinión de los ciudadanos sobre el sistema penal» (DER2015-67184-R), financiado por el Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad del MINECO y «Justicia penal para todos. Un estudio del funcionamiento y la accesibilidad de la justicia penal» financiado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Fecha de recepción de la versión definitiva de este artículo: 06-02-2019.

Cómo citar este artículo: Bernuz Beneitez, M. J. y Fernández Molina, E. (2019). La pedagogía de la justicia de menores: sobre una justicia adaptada a los menores | *The pedagogy of juvenile justice: a child-friendly justice*. *Revista Española de Pedagogía*, 77 (273), 229-244. doi: <https://doi.org/10.22550/REP77-2-2019-02>

<https://revistadepedagogia.org/>

ISSN: 0034-9461 (Impreso), 2174-0909 (Online)

## Abstract:

This article considers the educational opportunities offered by juvenile justice interventions when a young person has committed a criminal offence. Given that the response occurs in an environment that is not child-friendly, this text identifies the elements that legitimise this justice system and make children perceive it as a fair and appropriate response to their criminal behaviour. The need for punishment which is educational and responsibility-oriented is noted, as is the need for appropriately trained professionals to promote young people's participation in the procedure and improve their legal competence, based on the fact that passing through the criminal procedure can be an experience of legal socia-

lisation for young people and in order that the pedagogical action of justice is effective. Only in this way will juvenile offenders have a positive perception of the judicial experience, which offers an opportunity to improve their attitudes towards the law and the system. In short, this article comprises a reflection on the importance of the pedagogical action that juvenile justice deploys throughout the whole procedure and how its success can legitimise the intervention by a specialized criminal system and encourage young people to understand and accept its educational sense.

**Keywords:** juvenile justice, legitimacy, pedagogy, access to justice, participation, child friendly justice.

---

*«Predicar con el ejemplo significa que el ejemplo predica»*

(Gomá, 2015, p. 574)

## 1. Pedagogía en la justicia de menores o el proceso judicial como pedagogía

La actual justicia de menores española se constituye como una jurisdicción especializada que interviene con menores y jóvenes que han cometido alguno de los delitos tipificados en el Código Penal mientras tenían entre catorce y dieciocho años. Se entiende que su especialización deriva del tipo de población con que trabaja, que se encuentra en un proceso de madurez y de integración social y, por tanto, tiene unas necesidades especiales. Desde otro ángulo, es preciso considerar que se trabaja con un grupo que tiene una mayor capacidad de aprendizaje y de cambio. Algo que hace que la justicia de menores aborde la inter-

vención con el joven como una oportunidad de enseñanza que aliente en mayor o menor grado su evolución hacia una vida adulta prosocial, que evite la reincidencia y la consolidación de una carrera delictiva o, de manera más humilde, que fomente la responsabilización por los hechos cometidos y el daño causado, encauzando así el proceso de integración social. En definitiva, se trata de una oportunidad educativa que, para cumplir su función, deberá tener en cuenta la situación del menor, y para ser percibida como justa deberá ser proporcionada a la gravedad y circunstancias del delito. Aseguran Ortega y Romero (2013, p. 76) que los procesos educativos son «un largo aprendizaje [...] para vivir éticamente, es decir, en la responsabilidad».

Una de las cuestiones centrales de la justicia de menores es cómo lograr esos objetivos responsabilizadores y hacer que el menor de edad aproveche esa oportu-

nidad educativa. Una buena parte de la literatura tanto criminológica como pedagógica se ha centrado en el contenido educativo de las medidas judiciales que se imponen, eventualmente, al final del proceso judicial. Cuando hablamos de las medidas judiciales, sean estas de internamiento o de medio abierto, una cuestión importante a determinar es qué enseñar, sobre qué elementos intervenir, dónde centrar la atención y, sobre todo, cómo hacerlo. Los expertos han destacado que es fundamental fomentar la responsabilización del menor por el delito cometido, que aquel reconozca las consecuencias y efectos que sus acciones han tenido en los otros y, en la medida de lo posible, repare el daño causado y/o responda mediante la medida judicial que el juez considere oportuna (Dünkel, 2014). De la misma manera se ha evidenciado que es preferible reducir el internamiento (especialmente en régimen cerrado) a su mínima esencia, para los casos más graves y siempre por el menor tiempo posible, precisamente por su limitado carácter educativo (Fernández-Molina, 2012) y por lo paradójico que supone educar para vivir en sociedad, pero al margen de ella. En consecuencia, la justicia de menores ha ido consolidando un abanico de respuestas que apuestan por la intervención educativa con el menor en su medio de referencia (su familia, su escuela, sus amigos...) y que el juez escoge teniendo en cuenta su situación psicosocial y la naturaleza del delito cometido (Fernández-Molina y Bernuz, 2018). Y es que, como destacan Ortega y Romero (2013, p. 75), para que la educación sea efectiva debe tener en cuenta las circunstancias del educando. Aseguran que «no se pue-

de educar si no se conoce la situación y el contexto en que vive el educando, ni hacer abstracción de las características singulares de este, pretendiendo hacer una educación de validez universal».

De igual manera, es evidente que la acción educativa que pretende la justicia de menores depende en gran medida de la labor que realizan los profesionales que intervienen con los menores durante la ejecución de estas medidas judiciales. A estos corresponde dotar de contenido educativo el castigo impuesto por el juez y hacer el seguimiento de la evolución del menor en el cumplimiento de la medida. Y ello, teniendo en cuenta que las condiciones para la intervención educativa en la justicia de menores no siempre son las más idóneas. De entrada, se trata de una población cautiva, que no ha elegido estar ahí, que puede tener un historial más o menos importante de fracaso escolar y problemas de comportamiento y que no tiene opción entre cumplir o no con las medidas que se imponen judicialmente. Y, como en cualquier otro entorno que pretenda ser educativo y lograr efectos a medio y largo plazo, el profesional necesita contar con una cierta connivencia con el menor<sup>1</sup>. Y, si no connivencia, al menos son precisas una actitud favorable, una cierta motivación y una predisposición para aprender o para cambiar, y unas condiciones sociales que lo apoyen en ese cambio.

Esto se conseguirá, en parte, con una propuesta de actividades que los menores de edad sean capaces de realizar, que les resulte mínimamente gratificante y, sobre todo, que sea significativa para ellos

(Álvarez, Pintado y San Fabián 2014, p. 170). En esa línea, asegura Weijers (2002, p. 145) que la medida solo producirá su efecto educativo cuando el agresor la entiende justificada. Y ello se producirá, también en parte, como conclusión del *diálogo* que se ha producido en las diversas instancias judiciales y en el que el menor debe participar activamente. De alguna manera, la pedagogía del castigo juvenil también puede ser entendida como una metodología de aprendizaje que está atenta al proceso de enseñar y a las diferentes formas, momentos y profesionales que pueden hacerlo. En esa forma más amplia de entender la tarea educativa, todos y cada uno de los agentes que intervienen con el menor a lo largo del proceso judicial tienen una gran responsabilidad. Como diría Ortega (2004), toda relación profesional con el menor debe convertirse en una *situación educativa*.

Yendo un paso más allá, se ha insistido en destacar que el paso por el proceso de justicia juvenil puede suponer una experiencia (positiva o negativa) de socialización legal (Fagan y Tyler, 2005), en donde el menor va a ir adquiriendo un conocimiento y forjando unas actitudes hacia el sistema legal y judicial (Tyler y Trinkner, 2017). En efecto, el menor entra en contacto con una diversidad de profesionales (policiales, judiciales y sociales) cuando es sometido a un proceso penal. Cada interacción supone una oportunidad de aprendizaje y el rol educativo que adquiere cada profesional les obliga a ser conscientes de la incidencia de su actuación en las percepciones y actitudes que el adolescente desarrolle respecto al sistema en su conjunto.

Se trata de una perspectiva que tiene que ver con la consideración del profesional y de su actuación como ejemplos educativos. Como asegura Gomá (2015, pp. 570-571, 573),

si su comportamiento revela una virtud superior a la mía, el ejemplo me acusa y denuncia mi culpabilidad; si su mérito es inferior al mío, su ejemplo me excusa y me absuelve [...]. Quien es ejemplo de lo que predica tiene *auctoritas*.

Si se pretende que los objetivos educativos y responsabilizadores de las medidas judiciales lleguen más allá de la coerción que se aplica para su cumplimiento, se requiere, entre otras cuestiones, que los menores vean a los profesionales como autoridades legítimas en general y, en particular, como legitimadas para educar y para enseñar. Y, en definitiva, que perciban el sistema de justicia de menores como justo.

En este trabajo se va a reflexionar sobre las diferentes posibilidades educativas que ofrece la intervención que se realiza a través de la justicia juvenil. Nos detendremos brevemente en la importancia que adquiere la finalidad del castigo y en los requisitos esenciales que debe garantizar el sistema para que este resulte educativo. Nos centraremos en delimitar los aspectos más relevantes que promueven la acción pedagógica de la justicia de menores, especialmente, el que todos los profesionales del sistema garanticen la participación activa del menor en el proceso para que su opinión sea tenida en cuenta en la decisión final y para que comprenda el sentido de la medida finalmente impuesta. De igual

modo, nos detendremos en destacar la importancia que tienen las consecuencias de un trato profesional y especializado por parte de los actores del sistema que queda patente cuando se analizan las percepciones de los jóvenes sobre su paso por el sistema.

## 2. La finalidad educativa del castigo en la justicia juvenil

La justicia de menores ha conocido en su historia una diversidad de maneras de definir la infancia, entender sus delitos y responder a ellos. Es evidente que son cuestiones que van enlazadas y solo se entiende la respuesta a la delincuencia juvenil y el sentido del castigo cuando se ponen en relación con la forma de comprender la infancia y la adolescencia. Desde esa perspectiva, los autores identifican cuatro grandes modelos (más o menos puros) en la justicia de menores: el modelo tutelar, el retributivo, el reparador y el responsabilizador (entre otros, Fernández-Molina, 2008).

El modelo tutelar surge con la justicia de menores a inicios del siglo xx, con una pretensión de ofrecer una respuesta especial a una población diferente. Entiende que la infancia, por encontrarse en una fase de formación, tiene una serie de carencias físicas, psicológicas, emocionales o sociales que están en el origen de su comportamiento delictivo y, en consecuencia, la intervención desde la justicia juvenil debe orientarse a incidir en esos factores para evitar una posible reincidencia. En este modelo, dado que el niño es entendido como un sujeto pasivo, se

toman decisiones sin necesidad de contar con él o de valorar su opinión y sin buscar su connivencia en el proceso educativo, que tiende a ser autoritario *por el bien del menor*.

Las carencias y excesos punitivos que generó el celo de intervenir en las circunstancias psicosociales del menor, hicieron que se planteara la necesidad de atender principalmente al delito cometido a la hora de diseñar la respuesta al mismo (Gargarella, 2012). Se trata de un planteamiento que no ha sido prevalente en la justicia de menores ni previsto para la mayoría de la población que llega ante ella. Sin embargo, es una perspectiva retributiva que se evidencia más claramente cuando se reivindica un castigo más severo para los jóvenes que cometen los delitos de mayor gravedad. En esas ocasiones, parece razonarse en términos simplistas identificando la posibilidad y la capacidad para delinquir con la competencia para comprender el delito y el daño causado. Y, si se asume que el menor comprende lo que ha hecho, también se exige que se le imponga una medida más acorde con las circunstancias y gravedad del delito y menos atenta a sus circunstancias personales y psicosociales. Esta perspectiva obvia, sin embargo, el hecho de que el menor de edad se encuentra en un proceso formativo en todos los ámbitos, que justifica una intervención específica desde instituciones especializadas hasta que cumpla la mayoría de edad. La gravedad del delito cometido no es indicativo de una mayor madurez sino, posiblemente, de todo lo contrario, de una mayor vulnerabilidad (Fernández-Molina y Bernuz, 2018).



El modelo reparador se construye sobre premisas distintas. Entiende que el delito abre un conflicto entre el agresor(es) y la víctima(s) y sus familias. Considera que la mejor respuesta a ese conflicto es lograr que el agresor se responsabilice por el daño causado y repare de forma significativa a la víctima. Asume que la mejor manera de lograr esos objetivos es integrando a agresor y víctima en un proceso de diálogo para que, con ayuda de un facilitador, hablen sobre el daño causado y discutan sobre la mejor forma de repararlo. Se trata de un modelo que apuesta claramente por la participación activa del menor que ha delinquido en el proceso de responsabilización y de reparación del daño a través de una conciliación, reparación o la realización de servicios en beneficio de la comunidad (Bernuz, 2015). De alguna manera se trata de hacer pedagogía y de «enseñar en y desde el otro» (Ortega y Romero, 2013, p. 67), pero dando satisfacción también a los intereses de las víctimas. Todos los puntos de vista cuentan a la hora de plantear una solución al daño causado con el delito. Se entiende que las víctimas, a través de estos procesos, recuperan protagonismo en la resolución del conflicto, al tiempo que ayudan al menor a comprender el daño causado mediante la narración personal del mismo<sup>2</sup>. Es una forma de intervención que insiste en señalar las consecuencias de nuestras acciones en los demás<sup>3</sup>. Se trata de una perspectiva que ayuda al menor que ha agredido a salir de su propia exculpación para comprender las razones del otro que ha sufrido las consecuencias de sus hechos.

Sin embargo, los países occidentales, y entre ellos España, han apostado en la ac-

tualidad por el modelo de responsabilidad para orientar el castigo juvenil. Este modelo, que se enmarca en los postulados de la Convención de los Derechos de la Infancia, entiende que el niño es un sujeto de derecho a quien corresponden derechos de protección, promoción y también de participación. En concreto, la ley española entiende que el menor que ha cometido un delito entre los catorce y los dieciocho años es responsable desde un punto de vista penal, pero también comprende que por encontrarse en un proceso de formación las medidas deben tener una naturaleza sancionadora y educativa. Además, para conseguir que ese objetivo educativo de las medidas se proyecte a más largo plazo, aspira a que sean consideradas como justas por los menores haciendo que sean proporcionadas a la gravedad del delito cometido. Igualmente pretende que las medidas sean más eficaces adaptándolas a las circunstancias psicosociales del menor. En todo caso, también asume que la participación del menor en el proceso es importante desde un punto de vista formal y material. Desde un punto de vista formal porque entiende que para que el proceso sea justo debe contarse con la participación del menor. Desde un punto de vista material porque su participación en el procedimiento favorecerá una mejor comprensión de la medida y un cumplimiento más espontáneo de la misma. Se verá más detenidamente en el siguiente punto.

### 3. La pedagogía de una justicia comprensible y participativa

Partimos de la premisa de que, para que la justicia de menores cumpla su función pedagógica, en todo contacto con el

menor deben cumplirse dos requisitos vinculados entre sí. De un lado, el sistema y sus procedimientos deben ser comprensibles para los adolescentes, sobre todo teniendo en cuenta que entender el funcionamiento y sentido de las instituciones penales requiere un nivel de abstracción que, en muchas ocasiones, excede las capacidades de sus destinatarios. De otro lado, el sistema de justicia de menores debe permitir la participación de los jóvenes a lo largo del procedimiento dándoles la posibilidad de opinar sobre las decisiones que los adultos van a tomar y que les afectan directamente, así como de involucrarse en toda la acción educativa. Es evidente que el menor solo podrá participar efectivamente en una justicia de menores que le resulte accesible.

### 3.1. La necesaria accesibilidad de la justicia de menores

Uno de los principales problemas que plantea la aceptación y colaboración ciudadana con las instituciones penales en general y, especialmente con los tribunales, es la distancia que media entre quienes imparten justicia y quienes la acatan. Por ello, cada vez se habla más de la necesidad de mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia. Esta inaccesibilidad es mayor, si cabe, cuando los destinatarios de la actuación judicial son los niños y jóvenes. Los símbolos de la administración de justicia, un proceso opaco en sus pretensiones, el lenguaje técnico y la inercia de un sistema, diseñado hace siglos y que no se ha adaptado del todo a los usos y costumbres de la sociedad del siglo XXI, hacen del sistema penal un espacio hostil para quien interactúa con él. Así, se ha destacado que la

puesta en escena de la maquinaria judicial contribuye a generar esa imagen de la justicia como algo alejado. Espacios amplios, fríos, sus personajes y togas negras que lo unifican todo, dificultan comprender quién es quién y qué espera cada uno del menor procesado. Junto a esto, el lenguaje judicial lo complica todo y se erige en la principal barrera de acceso, especialmente para los jóvenes que ya de por sí tienen grandes dificultades para comunicarse de manera efectiva con el mundo adulto (Fernández-Molina, 2014, p. 625). Por ello, y especialmente en la última década, se ha insistido en la necesidad de promover una justicia adaptada a la infancia y la adolescencia (*child friendly justice*) en la línea propuesta por el Consejo de Europa<sup>4</sup>. En otras palabras, se trata de crear una justicia cercana, participativa y comprensible para los menores.

Tras esta iniciativa late, no solo el convencimiento de que hay que adaptar la justicia penal a los nuevos tiempos, sino también la constatación de que los jóvenes, a pesar de la madurez cognitiva que tienen ya en el período de la adolescencia, parten con algunas dificultades para ser competentes legalmente, porque todavía hay algunos aspectos que deben perfeccionarse y consolidarse hasta convertirse en adultos de pleno derecho. La literatura científica, procedente del ámbito de la psicología y la neurociencia, ha demostrado que existe toda una dimensión psicosocial que tiene que ver con aspectos emocionales y de autocontrol del comportamiento que todavía durante este período de la vida están en pleno proceso de desarrollo (Steinberg, 2013).

Esa inmadurez tiene dos consecuencias para nuestro colectivo diana. Por un lado, los hace más propensos a acabar involucrados en comportamientos delictivos. El hecho de que algunas partes del cerebro no estén lo suficientemente desarrolladas provoca una verdadera incapacidad para controlar sus impulsos. Si a ello se le une que los jóvenes tienden a pensar esencialmente a corto plazo, tienen una gran sensación de invulnerabilidad y una mayor predilección por experimentar nuevas sensaciones, los convierte en candidatos perfectos para realizar comportamientos de riesgo (Steinberg y Scott, 2003) que, como afirma Larrauri (2015), en ocasiones están tipificados como delitos. Por otro lado, esta inmadurez provoca una mayor incompetencia para comportarse debidamente durante el procedimiento judicial. Entender la naturaleza y el alcance del sistema penal, la función de sus actores, el sentido de sus procedimientos o comprender los derechos que les asisten, requiere tener cierta capacidad de abstracción y competencia en la toma de decisiones (Monahan, Steinberg y Piquero, 2015). Así, por ejemplo, un menor procesado debe decidir si hace uso o no de su derecho a declarar ante la policía; en su caso, debe decidir hasta dónde cuenta en su declaración o lo que comparte en la sala de justicia. De la misma forma, debe decidir si se conforma o no con la medida que le propone el fiscal (Grisso et al., 2003). Y aunque puede parecer que, en general, los menores pueden entender todo lo que ello supone, la investigación científica ha puesto de manifiesto que son más incompetentes para ejercer sus derechos y que su pensamiento es menos estratégico que el de los adultos ya que valoran,

comparan y sopesan peor las distintas alternativas (Grisso y Schwartz, 2000) y las consecuencias de sus actos.

Por esa incapacidad, el sistema debe hacer un esfuerzo añadido para permitir que los menores procesados puedan comprender el alcance de la actuación que pretende realizarse con ellos y participar efectivamente en el proceso. Participación que es importante desde dos puntos de vista. De un lado, para que el juicio sea considerado justo, el menor debe ser capaz de participar en el proceso y en la toma de decisiones. Esto es, si los adultos no pueden adoptar las decisiones al margen de sus protagonistas, será preciso insistir en la promoción de una justicia que genere el clima de confianza suficiente para que los jóvenes se expresen con libertad y aporten su propio punto de vista sobre lo acaecido. Y no puede promoverse la participación si previamente no ha habido una mínima información de cuáles son las reglas del juego. Por ello, los adultos deberán explicar a los menores previamente qué está pasando, qué va a ocurrir y qué se espera de ellos. De otro lado, solo si el menor participa comprenderá el sentido de las decisiones y medidas que se van a tomar y, solo cuando esto ocurra, la medida tendrá un alcance más educativo y responsabilizador que si se impone en un contexto incomprensible para él.

### 3.2. La participación de los jóvenes en la justicia de menores

Como avanzábamos, una de las ideas más innovadoras de la Convención de los Derechos de los Niños (1989) fue la de rechazar la idea del niño como objeto a cui-



dar y proteger, para entender que también debe ser considerado como un sujeto de derecho al que se le deben reconocer derechos de protección y promoción, pero también de participación. De hecho, Krappmann (2010, p. 502) ha asegurado que:

La noción de participación captura la esencia de la Convención. La Convención destaca que el niño es un ser humano que tiene derecho a ser respetado como un individuo único con su propia perspectiva e intenciones personales por el resto de seres humanos, por el Estado, sus instituciones y otras organizaciones<sup>5</sup>.

En el ámbito de la justicia de menores, el Comité de los Derechos del Niño ha asumido que la misma consideración de que el menor es responsable penalmente supone reconocer «que es competente para participar efectivamente en las decisiones que se tomen por infracciones de la legislación penal» (Kilkelly, 2008, p. 41)<sup>6</sup>.

La Convención ha conseguido que, al menos, las decisiones no se tomen de manera paternalista, por el bien del menor, sino teniendo en cuenta su *interés superior*, que exige conocer su opinión sobre el asunto (Comité de los Derechos del Niño, 2013). Aquí, una de las dificultades principales radica en saber integrar adecuadamente las opiniones y deseos del joven en una decisión que el juez debe tomar atendiendo a su interés superior. En todo caso, como mínimo, para que el menor se sienta partícipe, tiene que ser capaz de explicarle la distancia entre sus deseos y los criterios que están detrás de la decisión finalmente impuesta. Se ha destacado muy acertadamente que, a la postre, van a ser los

adultos quienes decidan cuándo pueden participar los menores y de qué manera (Bernuz y Dumortier, 2018). Por ello, Cordero (2015, p. 292) avanza que será preciso estar vigilantes para evitar una participación excesivamente protegida.

Sin embargo, y a pesar de la dificultad, la participación de los jóvenes en el procedimiento es posible y para ello es necesario tener en cuenta algunas consideraciones sobre las que han alertado las instancias supranacionales. Así, el Comité de los Derechos del Niño en la Observación general 12 (2009) señaló que la participación de los protagonistas de un proceso implica que debe existir un diálogo basado en el respeto mutuo en el que cada uno pueda expresar su visión de lo sucedido y que lo expresado en ese diálogo va a determinar el resultado final que se adopte. Además, insistió también en que para que esto ocurra, las interacciones deben producirse en un contexto que sea capaz de inspirar confianza y es muy importante que los menores perciban que los adultos están dispuestos a escuchar y a tomar en serio su visión de los hechos. Para eso, posiblemente será necesario que los actores legales modifiquen su proceder habitual. Así, en su comportamiento deberán omitir algunas formalidades (lenguaje, togas, etc.), hablar con el menor en un ambiente informal y lo suficientemente íntimo (al margen de otros profesionales que trabajan en la oficina judicial) como para hacer que el menor se sienta cómodo y pueda expresarse libremente y sin presiones y deberán permitir que el menor esté acompañado por sus padres o que comparezca solo, si lo prefiere así. Ahora bien, como han recordado las recomenda-

ciones sobre *child friendly justice*, habrá que explicar al menor (preferiblemente su abogado) que el hecho de que el juez lo escuche, no significa que su versión de los hechos sea la que va a prevalecer. De igual modo, cuando se adopte la decisión final, el juez deberá explicar al menor cómo se tuvieron en consideración sus opiniones y cuáles son las razones que le han llevado a imponer determinada medida.

Finalmente, como ya se apuntaba más arriba, para que el menor pueda participar efectivamente en el proceso, además de las adaptaciones ya advertidas, se hace imprescindible que el menor comprenda bien el procedimiento y conozca cuál es el alcance de las actuaciones que se van a realizar. De esta forma, el derecho a la información de los menores se convierte en un aspecto crucial que el sistema de justicia juvenil debe garantizar. De hecho, cuando el menor no ha sido informado adecuadamente, su sentimiento de injusticia aumenta porque se ve obligado a participar en un procedimiento o en una decisión cuyo alcance no comprende. Ese sentimiento de injusticia se extiende a toda la institución, a las decisiones que se adopten y a las medidas que se impongan. Sobre esto ya insistían las recomendaciones del Consejo de Europa y también lo ha hecho la Directiva 800/2016 *relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales* que deberá transponerse a nuestro ordenamiento jurídico antes de que finalice 2019.

Dos son los aspectos cruciales para que la información se produzca de forma efectiva y para que se promueva la acción

pedagógica de la justicia de menores. De un lado, la información debe adaptarse al nivel madurativo y cultural de los adolescentes, y para ello será necesario que los actores legales sean capaces de hacer las adaptaciones de registro necesarias y que tengan a su disposición materiales que faciliten la comprensión de los menores (Vandekerckhove y O'Brien, 2013). De otro lado, la información debe ser lo suficientemente detallada y explícita para que el menor pueda situarse en el proceso y sea capaz de prever lo que va a suceder y lo que se espera de él. Así, hay que explicar en cada fase del procedimiento cuánto va a durar, qué va a pasar, quién va a intervenir y cuál es su papel. Los menores, para entender y decidir en el procedimiento de la mejor manera, necesitan saber qué es lo que está pasando, qué va a pasar en el futuro y cuáles son las distintas alternativas que se le presentan y las consecuencias que derivan de cada una de ellas.

Es importante recordar que entre las razones para fomentar la participación del menor en la justicia de menores está su posible impacto (directo o indirecto) en la prevención de la reincidencia. Es cierto que la principal apuesta de la justicia de menores para prevenir la reincidencia pasa por la responsabilización por los delitos cometidos. Las vías para lograrlo van desde el diseño de medidas que tengan un contenido que ahonde en las razones y/o causas del delito y que le permitan comprender lo que ha hecho y las consecuencias que ha tenido su acción, pero también tienen que ver con la participación del menor a lo largo del proceso que le permitirá «mejorar la imagen que tienen de sí mis-

mos, ampliando sus recursos personales, afectivos y relacionales, fortaleciendo su autoestima y la capacidad que tienen para decidir en los asuntos públicos» (Caride y Varela, 2015, p. 156).

Además, ya apuntábamos que para que las medidas judiciales sean efectivamente educativas y responsabilizadoras y logren sus objetivos a medio y largo plazo, necesitan una cierta colaboración por parte del menor. Más concretamente, es preciso contar con una participación del menor en el proceso que le permita comprender mejor por qué se ha llegado hasta ahí y por qué se aplica una determinada medida judicial. Ya decíamos anteriormente que:

Si el menor participa en la toma de decisiones, se le hace partícipe de la misma, se le escucha, se le informa y se le explica la decisión, comprenderá mejor las razones subyacentes, colaborará más con unas instituciones que percibe como más justas y posiblemente el cumplimiento de la medida tenga mejores resultados y a más largo plazo que una medida impuesta [...]. Solo se logrará este objetivo a medio y largo plazo si el joven se ha sentido partícipe de las decisiones que se van tomando en los procesos ante la justicia de menores (Fernández-Molina y Bernuz, 2018, p. 191).

#### 4. Los protagonistas del sistema

Finalmente, para que la acción pedagógica del sistema sea exitosa y para verificar que efectivamente logra todos los efectos deseados es importante hacer referencia a las actuaciones de los agentes que intervienen en el sistema y a las percepciones de los menores infractores. En las últimas décadas, la literatura científica ha llamado la

atención sobre la importancia que tiene la percepción de justicia de los procedimientos para todos aquellos que interactúan con las autoridades legales. En gran parte porque esas percepciones van a condicionar las actitudes de los ciudadanos hacia el sistema y las leyes penales. Esto es especialmente importante cuando hablamos de menores porque, de esta manera, el paso por el procedimiento judicial se puede convertir en una experiencia de socialización legal (Fagan y Tyler, 2005) que permite al menor formarse una imagen sobre la legislación y el sistema penal y sobre si una y otro pueden considerarse o no como legítimos. De tal forma que los profesionales tienen que hacer de la experiencia judicial, no solo una oportunidad de aprendizaje, sino un ejercicio de reafirmación de la legitimidad de la institución penal (Tyler y Trinkner, 2017). Es evidente que se cumplirán más espontáneamente las decisiones judiciales que se imponen por instituciones que consideramos legítimas.

##### 4.1. La actuación de los profesionales: la apuesta por la equidad y la especialización

De acuerdo con lo anterior, cada agente cumple un papel determinante en la función educativa de la justicia de menores. Así, habría que empezar señalando cuáles son los elementos que la literatura científica ha identificado como aptos para garantizar una actuación legítima para quienes interactúan con el sistema penal (Tyler, 2006; Bottoms y Tankebe, 2012). En concreto, se indica que son dos los aspectos a tener en cuenta: la calidad en la toma de decisiones y la calidad de trato (Tankebe, 2013).

En primer lugar, los agentes deben garantizar que las decisiones que se adopten a lo largo del procedimiento sean equitativas, esto es, los menores deben percibir que las autoridades legales a la hora de apostar por una solución u optar por una respuesta concreta han sido imparciales y honestos, que sus prejuicios o consideraciones particulares no han prevalecido en la decisión final. Esto puede ser especialmente complicado en una jurisdicción, como la de menores, que es por definición individualizada y que tiene en cuenta no solo la naturaleza de los hechos cometidos sino también las circunstancias psicosociales del menor infractor. Algo que hace posible que el mismo delito sea castigado de forma muy diferente según las circunstancias del caso. De ahí que sea importante saber comunicar al menor las razones que hay detrás de esta decisión para que la comprenda. Además, será muy importante que los profesionales fomenten la justicia interpersonal en su intervención con los menores teniendo en cuenta las opiniones de todos sus protagonistas y, especialmente, la de los jóvenes objeto de la acción pedagógica, tratándolos con dignidad y respeto. Esto es especialmente importante porque los jóvenes son un colectivo muy atento a que se le trate como adultos y muy exigente para que su opinión sea tenida en consideración (Peterson-Badali, Care y Broeking, 2007; Rap, 2013; Woolard, Harvell y Graham, 2008). Además de ser un colectivo que se muestra receloso de todo aquello que provenga del mundo adulto del que desconfían.

Por ello, la única vía que cabe para el entendimiento mutuo es posibilitar canales de participación y comunicación efec-

tiva entre los menores y los profesionales. Y ello, solo será posible si estos han sido debidamente entrenados para tal fin. Toda la legislación supranacional y nacional en materia de infancia ha insistido en la necesidad de que todos los profesionales, especialmente los operadores jurídicos, cuenten con una especialización en el ámbito de menores. Y no solo relacionada con un conocimiento del marco normativo previsto para la infancia infractora, sino también con la capacidad para comprender las especificidades de los menores, el momento evolutivo en el que se encuentran, su nivel cognitivo, su madurez psicosocial y, muy especialmente, para manejar herramientas de comunicación efectiva con menores que les permita interpretar lo que sienten y expresan, estando atentos a todo lo que estos transmiten a través del lenguaje verbal, pero también del no verbal.

#### 4.2. Percepciones de los jóvenes sobre el sistema y su legitimidad

En definitiva, y de acuerdo con lo que se ha expuesto hasta el momento, el sistema de justicia de menores no puede actuar sin tener en consideración a las personas objeto de su intervención porque perdería una parte importante de su alcance educativo. Ello supone que hay que hacer un esfuerzo por comprender su perspectiva y conocer cuál es su opinión sobre su paso por el procedimiento y cómo han experimentado toda la acción educativa que se ha desarrollado. En este sentido, las investigaciones que se han realizado hasta el momento nos recuerdan que todavía quedan muchos aspectos a mejorar y a tomar seriamente en consideración. De hecho, muestran que las percepciones de equidad de los proce-

sos no son muy altas (Peterson-Badali, Care y Broeking, 2007; Sprott y Greene, 2010), especialmente las relacionadas con la participación (Kilkelly, 2010; Rap, 2013). También indica la investigación que aquellos jóvenes con más experiencia tienen peores valoraciones sobre la justicia (Woolard, Harvell y Graham, 2008). En nuestro país investigaciones recientes han puesto de manifiesto que los jóvenes no están del todo satisfechos con la experiencia judicial y se ha demostrado que la satisfacción está directamente relacionada con las percepciones de equidad de los procedimientos, confirmando así que esas percepciones sí son importantes para la valoración que realizan los menores. Así, muchos de ellos se fijan especialmente en la actuación de la policía y, a pesar de considerarla imparcial y honesta en su toma de decisiones, son muy críticos con el trato personal deparado, que consideran poco respetuoso (Pérez, Becerra y Aguilar, 2018). En efecto, aunque la policía no tenga una función pedagógica específica, sí que es cierto que es la cara más visible del sistema penal y por tanto la más empleada para formar una imagen sobre el sistema en su conjunto. Sin embargo, los jóvenes españoles que han interactuado con ella tienen una percepción más negativa que aquellos que no lo han hecho (Baz y Fernández-Molina, 2017).

Así mismo, aquellos jóvenes que se han visto sometidos a un procedimiento penal consideran muy importante el hecho de sentirse escuchados y valoran muy especialmente que su opinión haya sido tenida en cuenta (Fernández-Molina, Bermejo y Baz, 2018). De la misma manera, aprecian muy positivamente que se les explique qué

pasa a lo largo del procedimiento y por qué (Pérez, Becerra y Aguilar, 2018). Por ello, parece importante que aquellos que trabajan en el sistema de justicia de menores fomenten la competencia legal de los menores porque sus percepciones y su satisfacción mejoran (Fernández-Molina, Bermejo y Baz, 2018; Pérez, Becerra y Aguilar, 2018). Especialmente, porque se recuerda que cuando su percepción del sistema mejora, también lo hace la disponibilidad para cumplir más espontáneamente una medida que entienden como correcta y adecuada.

## 5. Conclusiones

En definitiva, este trabajo ha tratado de ahondar en la idea de que la acción pedagógica de la justicia de menores no solo se realiza en el último momento y una vez impuesta la medida judicial. A un modelo responsabilizador de justicia de menores que se aleja del retributivo y del tutelar le importa que el castigo tenga pretensiones a medio plazo, que solo se lograrán cuando la medida sea entendida como justa por el menor. Para ello el juez deberá adoptar una medida proporcional al delito cometido, aunque para ser educativa tendrá que tener en cuenta las circunstancias psicosociales del menor. Además, la medida será entendida como más justa cuando se ha impuesto a través de un procedimiento que fomente justicia procedimental e interpersonal y mediante profesionales que sirvan de ejemplo de cuanto exigen al menor. La investigación empírica realizada ha mostrado que los menores están atentos a cómo interviene la justicia y sus profesionales y es uno de los elementos que les sirve para calificarla de correcta o incorrecta. Solo cuando los me-



nores entienden que el sistema de justicia es justo asumirán que las decisiones que se toman por sus operadores son justas. Y solo en ese caso estarán dispuestos a entender que tienen que cumplirlas y el impacto educativo de la medida será mayor.

Educar en un entorno hostil como lo es la justicia de menores no es fácil y requiere al menos de connivencia con el menor y también con su familia. Se trata de una colaboración que se logrará, entre otras cuestiones, fomentando una justicia accesible que haga que el menor se sienta más cómodo durante el procedimiento y quiera participar, formando profesionales que sepan relacionarse con los menores adecuadamente, que sepan escucharlos y entender lo que quieren decir. En este contexto, quizás se podría afirmar que el sentimiento de justicia y de ser tratado con dignidad y con respeto también pueden ser una potente herramienta pedagógica.

## Notas

<sup>1</sup> Asegura Ortega (2004, p. 10) que «No es posible educar sin el reconocimiento del otro (el alumno), sin la voluntad de acogida. Y tampoco es posible educar (alumbrar algo nuevo) si el educando no percibe en el educador que es reconocido como alguien con quien se quiere establecer una relación ética, y como alguien que es acogido por lo que es y en todo lo que es, no solo por aquello que hace o produce».

<sup>2</sup> Como aseguran Bárcena y Melich (2003, pp. 207 y 210) «una educación de la mirada desde la víctima es una educación [...] que desvía la atención y el sentido de la mirada desde el espacio que ocupa el yo al espacio que ocupa el otro [...]. Es educar desde la experiencia de quien padece y sufre la injusticia».

<sup>3</sup> Se parte de la idea de que «responsabilidad ética para con los otros, aun con los desconocidos, significa que vivir no es un asunto *privado*, sino que tiene repercusiones inevitables mientras sigamos viviendo

en sociedad. Significa, en una palabra, que nadie me puede ser *indiferente*» (Ortega, 2004, p. 14).

<sup>4</sup> El 17 de noviembre de 2010 el Comité de Ministros del Consejo de Europa desarrolló unas recomendaciones sobre una justicia adaptada a los menores (*Guidelines on child friendly justice*).

<sup>5</sup> En el original: «The notion of participation captures an essential feature of the Convention. The Convention highlights that the child is a human being, who has the right to be respected as a unique individual with an own perspective and personal intentions by fellow human beings and also by the state, its institutions and other organizations».

<sup>6</sup> En el original: «that he/she is “competent and able to effectively participate in the decisions” made about infringements of the criminal law» (en el original).

## Referencias bibliográficas

- Álvarez Fernández, M. V., Pintado Rey, V. R. y San Fabián Maroto, J. L. (2014). Elaboración de propuestas didácticas orientadas a mejorar los programas socioeducativos para jóvenes en situación de riesgo social. *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria*, 23, 151-173.
- Bárcena, F. y Melich, J. C. (2003). La mirada ex-céntrica. Una educación desde la mirada de la víctima. En J. M. Mardones y R. Mate (Eds.), *La ética ante las víctimas* (pp. 195-218). Barcelona: Anthropos.
- Baz, O. y Fernández-Molina, E. (2017). Process-based model in adolescence. Analyzing police legitimacy and juvenile delinquency within a legal socialization framework. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 24 (3), 237-252.
- Bernuz Beneitez, M. J. y Dumortier, E. (2018). Why children obey the law: Rethinking juvenile justice and children's rights in Europe through procedural justice. *Youth Justice*, 18 (1), 34-51.
- Bernuz Beneitez, M. J., Fernández Molina, E. y Pérez Jiménez, F. (2009a). Educar y controlar: la intervención comunitaria en la justicia de menores. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 11 (12), 1-28.
- Bernuz Beneitez, M. J., Fernández Molina, E. y Pérez Jiménez, F. (2009b). La libertad vigilada como medida individualizadora en la justicia de menores. *Revista Española en Investigación Criminológica*, 7, 1-27.

- Bernuz Beneitez, M. J. (2015). El derecho a ser escuchado: el caso de la infancia en conflicto con la norma. *Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas*, 33, 67-98.
- Birckhead, T. (2009). Toward a theory of procedural justice for juveniles. *Buffalo Law Review*, 57, 1447-1513.
- Bottoms A. y Tankebe, J. (2012). Beyond procedural justice: A dialogic approach to legitimacy in criminal justice. *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 102 (1), 119-253.
- Caride Gómez, J. A. y Varela Crespo, L. (2015). La pedagogía social en la vida cotidiana de los jóvenes: problemáticas específicas y alternativas de futuro en un mundo globalizado. *Perspectiva educacional. Formación de profesores*, 54 (2), 150-164.
- Comité de los Derechos del Niño (2007). *Observación General n° 10. Los derechos del niño en la justicia de menores*. Ginebra: Naciones Unidas.
- Comité de los Derechos del Niño (2009). *Observación General n° 12. El derecho del niño a ser escuchado*. Ginebra: Naciones Unidas.
- Comité de los Derechos del Niño (2013). *Observación General n° 14. El derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial*. Ginebra: Naciones Unidas.
- Cordero Arce, M. (2015). Maturing children's rights theory. From children, with children, of children. *International Journal of Children's Rights*, 23 (2), 283-331.
- Dünkel, F. (2014). Juvenile Justice Systems in Europe. Reform developments between justice, welfare and 'new punitiveness'. *Kriminologijos studijos*, 1 (1), 31-76.
- Fagan, J. y Tyler, T. (2005). Legal socialization of children and adolescents. *Social Justice Research*, 18 (3), 217-242.
- Feld, B. (2006). Juveniles' Competence to exercise Miranda Rights: An empirical study of police and practice. *Minnesota Law Review*, 91 (26), 26-100.
- Fernández-Molina, E. (2008). *Entre la educación y el castigo. Un análisis de la justicia de menores*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Fernández-Molina, E. (2012). El internamiento de menores. Una mirada hacia la realidad de su práctica en España. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 14 (18), 1-20.
- Fernández-Molina, E. (2014). Repensando la justicia de menores. En F. Miró, J. R. Agustina, J. E. Medina y L. Summers (Eds), *Crimen, oportunidad y vida diaria. Libro homenaje al Profesor Dr. Marcus Felson* (pp. 613-647). Madrid: Dykinson.
- Fernández-Molina, E., Bermejo, M. R. y Baz, O. (2018). Percepciones de los jóvenes infractores sobre la justicia de menores. *Revista Española de Investigación Criminológica*, 16, 1-25.
- Fernández-Molina, E. y Bernuz, M. J. (2018). *Justicia de menores*. Madrid: Síntesis.
- Gargarella, R. (2012). Injusticia penal, justicia social. En R. Gargarella (Ed.), *El castigo penal en sociedades desiguales* (pp. 119-142). Buenos Aires: CIEPP.
- Gomá Lanzón, J. (2015). *Imitación y experiencia*. Madrid: Taurus.
- Grisso, T. y Schwartz, R. G. (2000). *Youth on Trial: A Developmental Perspective on Juvenile Justice*. Chicago: University of Chicago Press.
- Grisso, T., Steinberg, L., Woolard, J., Cauffman, E., Scott, E., Graham, S. y Schwartz, R. (2003). Juveniles' competence to stand trial: A comparison of adolescents' and adults' as trial defendants. *Law and Human Behaviour*, 27 (4), 333-366.
- Kilkelly, U. (2008). Youth courts and children's rights: the Irish experience. *Youth Justice*, 8 (1), 39-56.
- Kilkelly, U. (2010). *Listening to children about justice: Report of the Council of Europe consultation with children on child-friendly justice*. Estrasburgo: Consejo de Europa.
- Krappmann, L. (2010). The weight of the child's view (article 12 of the Convention on the Rights of the Child). *International Journal of Children's Rights*, 18, 501-513.
- Larrauri, E. (2015). *Introducción a la criminología y al sistema penal*. Madrid: Trotta.
- Monahan, K., Steinberg, L. y Piquero, A. (2015). Juvenile Justice Policy and Practice: A developmental perspective. *Crime and Justice*, 44 (1), 577-619.
- Ortega Ruiz, P. (2004). La educación moral como pedagogía de la alteridad, **revista española de pedagogía**, 62, (227) 5-30.
- Ortega Ruiz, P. y Romero Sánchez, E. (2013). La experiencia de las víctimas en el discurso pedagógico. *Teoría de la Educación*, 25 (1), 63-77.

- Pérez, F., Becerra, J. y Aguilar, A. (2018). Cómo perciben los menores infractores la justicia que se les aplica: un acercamiento desde la justicia procedimental. *Revista Española de Investigación Criminológica*, 16, 1-26.
- Peterson-Badali, M., Care, S. y Broeking, J. (2007). Young People's Perceptions and Experiences of the Lawyer-Client Relationship. *Canadian Journal of Criminology & Criminal Justice*, 49 (3), 375-402.
- Rap, S. (2013). *The participation of juvenile defendants in youth courts*. Utrecht: University Utrecht.
- Sprott, J. B. y Greene, C. (2010). Trust and confidence in the courts does the quality of treatment young offenders receive affect their views of the courts? *Crime & Delinquency*, 56 (2), 269-289.
- Steinberg, L. (2013). The influence of neuroscience on US Supreme Court decisions about adolescents' criminal culpability. *Nature Reviews Neuroscience*, 14 (7), 513-518.
- Steinberg, L. y Scott, E. S. (2003). Less guilty by reason of adolescence: developmental immaturity, diminished responsibility, and the juvenile death penalty. *American Psychologist*, 58 (12), 1009-1018.
- Tankebe, J. (2013). Viewing things differently: The dimensions of public perceptions of police legitimacy. *Criminology*, 51 (1), 103-135.
- Tyler, T. (2006). *Why people obey the law?* Chelsea: Yale University Press.
- Tyler, T. y Trinkner, R. (2017). *Why Children Follow Rules*. Oxford: Oxford University Press.
- Vandekerckhove, A. y O'Brien, K. (2013). Child-Friendly Justice: turning law into reality. *Europäische Rechtsakademie Academy*, 14, 523-541.
- Weijers, I. (2002). The Moral Dialogue: a Pedagogical Perspective on Juvenile Justice. En I. Weijers y A. Duff (Eds.), *Punishing juveniles. Principle and critique* (pp. 135-154). Oxford: Hart Publishing.
- Woolard, J. L., Harvell, S. y Graham, S. (2008). Anticipatory injustice among adolescents: age and racial/ethnic differences in perceived unfairness of the justice system. *Behavioral Sciences & the Law*, 26 (2), 207-226.

## Biografía de las autoras

**María José Bernuz Beneitez** es Doctora en Derecho, Profesora Titular de Filosofía del Derecho e Investigadora del Laboratorio de Sociología jurídica en la Universidad de Zaragoza. Su investigación sobre justicia de menores comenzó con la tesis doctoral y la ha continuado mediante proyectos nacionales y europeos sobre el tema (Youprev), así como con la colaboración con grupos de investigación en criminología en Albacete, Bruselas (VUB) y Oporto. Aparte de esta línea de investigación, también ha trabajado sobre políticas de seguridad, violencia de género o derechos de los animales.

 <https://orcid.org/0000-0001-7723-5172>

**Esther Fernández Molina** es Profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha. Directora del Centro de Investigación en Criminología y responsable del Grupo Consolidado de Investigación en Criminología y Delincuencia Juvenil de la Universidad de Castilla-La Mancha. Sus principales líneas de investigación son la justicia de menores, las tendencias delictivas de la delincuencia y las percepciones públicas sobre el delito (miedo al delito, actitudes hacia el castigo juvenil y actitudes hacia las instituciones penales).

 <https://orcid.org/0000-0002-3103-0232>

# Sumario\*

## Table of Contents\*\*

### Respuestas educativas y cívico-penales a los comportamientos antisociales

#### *Educational and civic-penal responses to antisocial behavior*

Editor invitado: Fernando Gil Cantero  
Guest editor: *Fernando Gil Cantero*

#### **Fernando Gil Cantero**

Presentación: Respuestas educativas y cívico-penales a los comportamientos antisociales

*Introduction: Educational and civic-penal responses to antisocial behavior*

209

#### **David Reyero, Fernando Gil Cantero**

La educación que limita es la que libera

*Education that limits is education that frees*

213

#### **María José Bernuz Beneitez, Esther Fernández Molina**

La pedagogía de la justicia de menores: sobre una justicia adaptada a los menores

*The pedagogy of juvenile justice: a child-friendly justice*

229

#### **Marina Martins, Carolina Carvalho**

¿En qué mienten los adolescentes?

*What do teenagers lie about?*

245

#### **Inmaculada Méndez, Cecilia Ruiz Esteban, Juan Pedro Martínez, Fuensanta Cerezo**

Ciberacoso según características sociodemográficas y académicas en estudiantes universitarios

*Cyberbullying according to sociodemographic and academic characteristics among university students*

261

#### **Irene Montiel, José R. Agustina**

Retos educativos ante los riesgos emergentes en el ciberespacio: claves para una adecuada prevención de la cibervictimización en menores

*Educational challenges of emerging risks in cyberspace: foundations of an appropriate strategy for preventing online child victimization*

277

#### **Maialen Garmendia Larrañaga, Estefanía Jiménez Iglesias, Nekane Larrañaga Aizpuru**

*Bullying y cyberbullying: victimización, acoso y daño.*

Necesidad de intervenir en el entorno escolar

*Bullying and cyberbullying: victimisation, harassment, and harm. The need to intervene in the educational centre*

295

#### **Ana Rosser-Limiñana, Raquel Suriá-Martínez**

Adaptación escolar y problemas comportamentales y emocionales en menores expuestos a violencia de género

*School adaptation and behavioural and emotional problems in minors exposed to gender violence*

313

\* Todos los artículos están también publicados en inglés en la página web de la revista: <https://revistadepedagogia.org>.

\*\* All the articles are also published in English on the web page of the journal: <https://revistadepedagogia.org>.

**Fanny T. Añaños-Bedriñana, Miguel Melendro, Rocío  
Raya Miranda**

Mujeres jóvenes con medidas de protección y  
judiciales y sus tránsitos hacia la prisión

*Young women with protective and judicial measures and their  
transit towards prison*

**333**

## **Reseñas bibliográficas**

**Esteban Bara, F.** *Ética del profesorado* (Juan  
García Gutiérrez). **García Amilburu, M., Bernal,**

**A. y González Martín, M. R.** *Antropología de la  
educación. La especie educable* (Yaiza Sánchez

Pérez). **Rose, D. y Martin, J. R.** *Leer para aprender.*

*Lectura y escritura en las áreas del currículo* (Francisco

Lorenzo Bergillos). **Buxarrais, M. R. y Vilafranca, I.**

**(Coords.).** *Una mirada femenina de la educación moral*

(Eric Ortega González).

**351**

## **Informaciones**

«ECER conference Education in an Era of Risk—the  
Role of Educational Research for the Future» —de la  
European Educational Research Association (EERA)—;

III Congreso «European Liberal Arts and Core Texts

Education»; VIII Congreso del Jubilee Centre for  
Character and Virtues: «Virtues and the Flourishing

Life»; XLV Congreso Internacional de AME 2019:

«Morality and Ethics for the Digital World»; III Premio

Ricardo Marín Ibáñez; **Una visita a la hemeroteca**

**(profesores youtubers)** (Daniel Pattier); **Una visita a**

**la red** (David Reyero).

**365**

## **Instrucciones para los autores**

Instructions for authors

**375**



ISSN: 0034-9461 (Impreso), 2174-0909 (Online)

<https://revistadepedagogia.org/>

Depósito legal: M. 6.020 - 1958

INDUSTRIA GRÁFICA ANZOS, S.L. Fuenlabrada - Madrid



# The pedagogy of juvenile justice: a child-friendly justice \*

## La pedagogía de la justicia de menores: sobre una justicia adaptada a los menores

María José BERNUZ BENEITEZ, PhD. Associate Professor. Universidad de Zaragoza ([mbernuz@unizar.es](mailto:mbernuz@unizar.es)).

Esther FERNÁNDEZ MOLINA, PhD. Associate Professor. Universidad de Castilla-La Mancha ([esther.fdez@uclm.es](mailto:esther.fdez@uclm.es)).

### Abstract:

This article considers the educational opportunities offered by juvenile justice interventions when a young person has committed a criminal offence. Given that the response occurs in an environment that is not child-friendly, this text identifies the elements that legitimise this justice system and make children perceive it as a fair and appropriate response to their criminal behaviour. The need for punishment which is educational and responsibility-oriented is noted, as is the need for appropriately trained professionals to promote young people's participation in the procedure and improve their legal competence, based on the fact that passing through the criminal procedure can be an experience of legal socialisation for young people

and in order for the pedagogical action of justice to be effective. Only in this way will juvenile offenders have a positive perception of the judicial experience, which offers an opportunity to improve their attitudes towards the law and the system. In short, this article comprises a reflection on the importance of the pedagogical action that juvenile justice deploys throughout the whole procedure and how its success can legitimise the intervention by a specialized criminal system and encourage young people to understand and accept its educational sense.

**Keywords:** juvenile justice, legitimacy, pedagogy, access to justice, participation, child friendly justice.

---

\*This work derives from the development of two research projects that have received public funding: "Ciudadanos y justicia penal. Un análisis de la opinión de los ciudadanos sobre el sistema penal" (Citizens and criminal justice: an analysis of citizens' views of the criminal justice system) (DER2015-67184-R), funded by the State Programme for R&D Focussing on Social Challenges of Spain's Ministry of the Economy and "Justicia penal para todos. Un estudio del funcionamiento y la accesibilidad de la justicia penal" (Criminal justice for all: a study into the functioning and accessibility of criminal justice) funded by the Council of Education, Culture and Sports of the Government of Castilla-La Mancha.

Revision accepted: 2019-02-06.

This is the English version of an article originally printed in Spanish in issue 273 of the **revista española de pedagogía**. For this reason, the abbreviation EV has been added to the page numbers. Please, cite this article as follows: Bernuz Beneitez, M. J., & Fernández Molina, E. (2019). La pedagogía de la justicia de menores: sobre una justicia adaptada a los menores | *The pedagogy of juvenile justice: a child-friendly justice*. *Revista Española de Pedagogía*, 77 (273), 229-244. doi: <https://doi.org/10.22550/REP77-2-2019-02>

<https://revistadepedagogia.org/>

ISSN: 0034-9461 (Print), 2174-0909 (Online)

year 77, n. 273, May-August 2019, 229-244  
revista española de pedagogía



## Resumen:

Este artículo ahonda en las oportunidades educativas que ofrece el propio proceso judicial, cuando un joven ha cometido una infracción penal. Siendo conscientes de que la respuesta se produce en un entorno poco amigable para la adolescencia, en este texto se señalan aquellos elementos que legitiman este sistema de justicia y hacen que los menores lo puedan percibir como justo y adecuado para responder a su comportamiento delictivo. Partiendo de que el paso por el procedimiento penal puede ser una experiencia de socialización legal para los menores y precisamente para que la acción pedagógica de la justicia surta efecto, se reivindica no solo la necesidad de un castigo esencialmente educativo y responsabilizador, sino también de unos profesionales debidamente formados que promuevan la participación del

joven en el procedimiento y mejoren su competencia legal. Solo así será posible que la experiencia judicial vivida por los menores infractores sea percibida positivamente y suponga una oportunidad de aprendizaje que mejore las actitudes de aquellos hacia la ley y el sistema. En definitiva, se propone una reflexión sobre la importancia de la acción pedagógica que la justicia de menores despliega a lo largo de todo el procedimiento y de cómo su éxito logra legitimar la intervención de un sistema penal especializado y favorecer que el menor entienda y acepte su sentido educativo.

**Descriptor:** justicia de menores, legitimidad, pedagogía, justicia accesible, participación, justicia adaptada al menor, percepciones de justicia.

---

*“Leading by example means that the example leads”*

(Gomá, 2015, p. 574)

## 1. Pedagogy in the juvenile justice system or the judicial process as pedagogy

Spain's juvenile justice system is currently constituted as a specialist jurisdiction which works with children between the ages of fourteen and eighteen who commit any of the offences listed in Spain's penal code. Its specialisation derives from the type of population with which it works, a group which has some special requirements as it is in a process of maturing and social integration. From another angle, it is necessary to consider that it works with

a group with a greater capacity for learning and change. This means that juvenile justice approaches the intervention with the young person as a teaching opportunity which, to a greater or lesser extent, supports the child's development towards a prosocial adult life, avoiding recidivism and the consolidation of a criminal career or, more modestly, fostering taking responsibility for the acts committed and the damage caused, thus channelling the process of social integration. Ultimately, it is an educational opportunity which, in order to fulfil its function, must take into account the young person's situation, and to be perceived as fair, it must be proportionate to the seriousness and circumstances of the offence. Ortega and Romero (2013, p. 76) note that educational processes are

“a long process of learning... to live ethically, in other words, responsibly”.

One of the core questions in juvenile justice is how to achieve these objectives of encouraging responsibility and ensuring that the young person takes advantage of the educational opportunity. Much of the literature, both criminological and pedagogical, has focussed on the educational content of the legal measures imposed at the end of the legal process. When we speak of the legal measures, whether these involve internment or an open setting, one important matter to determine is what to teach, which elements to work on, where to focus attention and, above all, how to do so. Experts have emphasised that it is vital to encourage young people to take responsibility for the offences committed, recognise the consequences and effects of their actions on others, and, insofar as it is possible, make amends for the damage caused and/or respond through the legal measures the judge deems appropriate (Dünkel, 2014). Similarly, it has been shown that it is advisable to reduce internment to a minimum (especially in closed centres), limiting it to the most serious cases and always for the shortest possible time, precisely because of its limited educational value (Fernández-Molina, 2012) and because of the paradox of educating about how to live in society while separated from it. Consequently, juvenile justice has established a range of responses based on educational interventions with young people in their normal environment (family, school, friends, etc.), which judges choose taking into consideration the children's psychosocial situation and the

nature of the offence committed (Fernández-Molina & Bernuz, 2018). The fact is, as Ortega and Romero observe (2013, p. 75), for education to be effective, it must take into account the learner's circumstances. They state that “it is not possible to educate without knowing the situation and context in which the learner lives, or by attempting to provide a universally applicable education which disregards the learner's particular characteristics”.

Similarly, it is clear that the educational action juvenile justice aims to provide largely depends on the efforts of professionals who work with young people during the implementation of these legal measures. Their role is to give educational content to the punishment imposed by the judge and monitor the children's progress while the measures are being implemented. And this must be done taking into account the fact that the conditions for educational intervention in juvenile justice are not always ideal. Firstly, the population is a captive one which has not chosen to be there, which might have a more or less significant history of educational failure and behavioural problems, and which has no choice of whether to comply with the legal measures imposed. And, as in any other setting which aims to be educational and have medium and long-term effects, the professional has to have a certain degree of cooperation with the young person<sup>1</sup>. And if not cooperation, then a favourable attitude, a certain motivation, and a predisposition to learn or to change are necessary, as are social conditions that support the young person in this change.

This will, in part, be achieved with a scheme for activities young people can perform which are at least minimally pleasing to them, and which, above all, are meaningful to them (Álvarez, Pintado, & San Fabián 2014, p. 170). On these lines, Weijers states (2002, p. 145) that the measures will only have an educational effect when the offender believes they are justified. And this will happen, again in part, as a result of the “dialogue” which has occurred in the various judicial channels and in which the child must participate actively. In a way, the pedagogy of juvenile punishment can also be understood as a learning methodology which is mindful of the process of teaching and of the different forms, moments, and professionals that might be involved in it. In this broader way of understanding the educational task, all of the agents involved with the juvenile throughout the legal process have a great responsibility. As Ortega said (2004), any professional relationship with the child must become an *educational situation*.

Going a step further, there has been a focus on emphasising that passing through the juvenile justice system could be a (positive or negative) experience of legal socialisation (Fagan & Tyler, 2005), one in which young people acquire knowledge of the legal and judicial systems and have their attitudes towards them shaped (Tyler & Trinkner, 2017). Indeed, children come into contact with a variety of professionals (police, legal, and social) when subjected to a legal proceeding. Each interaction is a chance to learn, and the educational role all professionals acquire obliges them to be aware of the impact of their actions on the

perceptions and attitudes the adolescent develops towards the system as a whole.

This is a perspective which relates to the regarding of professionals and their actions as educational examples. As Gomá (2015, pp. 570-571, 573) notes

if their behaviour reveals a virtue higher than mine, the example condemns me and denounces my culpability; if its merit is less than mine, its example excuses and absolves me... Anyone who is an example of what they teach will have *auctoritas*.

If the aim is for the educational and responsibility-oriented objectives of the judicial measures to go beyond the coercion used to impose them, it is, among other matters, necessary that the young people see the professionals as legitimate authorities in general and, in particular, as entitled to educate and teach. And, ultimately, that they see the juvenile justice system as fair.

In this work, we will reflect on the different educational possibilities offered by the intervention carried out through juvenile justice. We will briefly consider the importance of the purpose of the punishment and the essential requirements the system must guarantee to ensure it is educational. We will focus on defining the most relevant aspects that promote the pedagogical action of juvenile justice, especially, the fact that all professionals in the system must ensure that the young people participate actively in the process so that their opinions are taken into account in the final decisions and so that they understand the meaning of the measures finally imposed. Similarly, we will illustrate the importance of the consequenc-

es of professional and specialised treatment by the agents in the system, which is apparent when analysing young people's perceptions of their passage through the system.

## 2. The educational purpose of punishment in juvenile justice

Throughout its history, juvenile justice has used a range of ways to define childhood, understand its offences, and react to them. It is clear that these questions are connected and the response to juvenile delinquency and the meaning of the punishment can only be understood when seen in relation with how childhood and adolescence are understood. From this perspective, four major (more or less pure) models in juvenile justice have been identified: the welfare model, the justice model, the restorative model, and the responsibility-oriented model (among others, Fernández-Molina, 2008).

The welfare model appears with juvenile justice at the start of the 20th century, in an effort to offer a special response to a different population. It is based on the assumption that, as children are in a formative stage, they have a series of physical, psychological, emotional, and social deficiencies which are at the root of their criminal behaviour, and so juvenile justice interventions must be aimed at working on these factors to avoid possible recidivism. In this model, as children are viewed as passive subjects, decisions are taken without the need for their involvement or for their opinions to be valued and without seeking their cooperation in the educational process, which tends towards authoritarianism "for the good of the child".

The deficiencies and punitive excesses created by the zeal to intervene in young people's psycho-social circumstances, led to the need to consider primarily the offence committed when designing the response to it being raised (Gargarella, 2012). This approach has not been prevalent in juvenile justice nor has it been provided for most of the people who come before the juvenile justice system. Nonetheless, it is a retributive perspective. This is most obviously apparent when more severe punishments are demanded for young people who commit more serious offences. On these occasions, it seems to argue in simplistic terms, identifying the ability to offend with the competence to understand the offence and any damage caused. And, if it assumes that the young people understand what they have done, it also demands that measures more in accordance with the circumstances and seriousness of the offences and less attentive to their personal and psycho-social circumstances be imposed on them. This perspective, however, ignores the fact that children are in a formative process in all areas, which justifies specific intervention by specialist institutions until they are of legal age. The severity of the offence committed is not indicative of a greater maturity but, possibly the opposite, of greater vulnerability (Fernández-Molina & Bernuz, 2018).

The restorative model is based on different assumptions. It understands that the offence creates a conflict between the offender(s) and the victim(s) and their families. It assumes that the best response to this conflict is for the offender to accept responsibility for the harm caused and



make meaningful amends to the victim. It assumes that the best way to achieve these objectives is to bring the offender and the victim together in a process of dialogue so that, with the help of a facilitator, they can speak about the harm caused and discuss the best way to remedy it. This model clearly entails active participation by the child who has offended in the process of accepting responsibility and making amends for the damage through conciliation, redress, or performing services for the benefit of the community (Bernuz, 2015). In a way, it is a case of educating and “teaching in and from the other” (Ortega & Romero, 2013, p. 67), but also of satisfying the interests of the victims. All perspectives are valid when proposing a solution to the harm caused by the offence. It is understood that the victims, through these processes, regain a central role in the resolution of the conflict, at the same time as helping to understand the harm caused through the personal narration of it<sup>2</sup>. This type of intervention stresses the impact of our actions on others<sup>3</sup>. It is a perspective which helps young offenders to escape from their exculpation of themselves to understand the views of the other person who has suffered the consequences of their actions.

Nonetheless, Western countries, including Spain, currently favour the responsibility-oriented model to guide juvenile punishment. This model, which is framed in the postulates of the Convention on the Rights of the Child, regards the child as a legal subject who also has protection, promotion and participation rights. Specifically, Spanish law states that a child aged between fourteen and eighteen who

has committed an offence is responsible from a criminal perspective, but it also understands that as he or she is in a formative process, the measures must have a sanctioning and educational nature. Also, to ensure that the educational objective of the measures has a longer-term impact, there is an aspiration for them to be seen as fair by the young person, making them proportional to the severity of the offence committed. It also aims to make measures more effective by adapting them to the psychosocial circumstances of the child. In any case, it also assumes that the child’s participation in the process is important from a formal and material perspective. From a formal perspective because it considers that for the process to be fair, she or he must participate in it. From a material perspective because if the child participates in the process, this will favour better understanding of the measure and more willing compliance with it. This will be considered in more detail in the next section.

### 3. The pedagogy of a comprehensible and participatory justice

We start from the premise that for juvenile justice to fulfil its pedagogical function, two interconnected requirements must be complied with in all contacts with young people. On the one hand, the system and its procedures must be comprehensible for adolescents, above all taking into account the fact that understanding the functioning and meaning of criminal institutions requires a degree of abstraction which often exceeds the capacities of its subjects. On the other hand, the juvenile

justice system must allow young people to participate throughout the procedure, giving them the option to state their opinions on the decisions the adults will take and which affect them directly as well as involving them in any educational action. It is clear that children will only be able to participate effectively in a juvenile justice system that is accessible to them.

### 3.1. The necessary accessibility of juvenile justice

One of the main problems posed by citizens' acceptance of and involvement in penal institutions in general, and the courts in particular, is the distance between those who deliver justice and those whom it affects. Therefore, the need to improve citizens' access to justice is increasingly being discussed. This lack of access is, if possible, greater when the people on the receiving end of the legal action are children and juveniles. The symbols of the administration of justice, a process with opaque aims, its technical language, and the inertia of a system designed centuries ago and which has not fully adapted to the habits and customs of 21st-century society, make the penal system a hostile space for people interacting with it. It has been noted that the staging of the legal machinery contributes to creating this image of justice as something distant. Wide, cold spaces and characters wearing black robes that make everything uniform make it hard to understand who is who and what each of them expects of the young person on trial. In addition, legal language complicates everything and is the main barrier to access, especially for young people who already have significant difficulties communicating effectively

with the adult world (Fernández-Molina, 2014, p. 625). Therefore, and especially over the last decade, the need to promote a justice adapted to childhood and adolescence (child friendly justice) on the lines proposed by the Council of Europe has frequently been emphasised<sup>4</sup>. In other words, it is a matter of creating a justice system that is close, participatory, and comprehensible for children.

Underlying this initiative is not only the conviction that penal justice must adapt to the new times, but also the confirmation that young people, despite the cognitive maturity they already have during adolescence, start off with certain obstacles to being legally competent, because some aspects still need to be perfected and consolidated for them to become fully adult. Academic literature from the fields of psychology and neuroscience has shown that there is a whole psycho-social dimension relating to emotional aspects concerning self-control of behaviour that are still developing at this stage in life (Steinberg, 2013).

This immaturity has two consequences for our target group. On the one hand, it makes them more prone to become involved in criminal behaviour. The fact that some parts of the brain are still not sufficiently developed causes a genuine inability to control impulses. In addition, young people tend to think essentially in the short term, they have a great sensation of invulnerability and a greater predilection to experience new sensations. This makes them perfect candidates for carrying out risky behaviour (Steinberg & Scott, 2003) which, as Larrauri notes (2015), is some-

times classified as offences. On the other hand, this immaturity means they are less able to behave appropriately during legal proceedings. Understanding the nature and scope of the justice system, the roles of its agents, the meaning of its procedures, or understanding their rights, requires a certain capacity for abstract thought and decision-making competence (Monahan, Steinberg, & Piquero, 2015). So, for example, young people who are tried must decide whether or not to exercise the right to make a statement to the police, and, when applicable, they must decide how far to go in the statement and what to share in court. In the same way, they must decide whether or not they are in agreement with the measures proposed by the prosecutor (Grisso et al., 2003). And while it might seem that children can generally understand all this involves, academic research has shown that they are less able to exercise their rights and that their thinking is less strategic than that of adults as they are worse at evaluating, comparing, and weighting different alternatives (Grisso & Schwartz, 2000) and the consequences of their actions.

Given this inability, the system must make an effort to allow young people who are tried to be able to understand the scope of the action that will affect them and to participate effectively in the process. This participation is important from two perspectives. On the one hand, for the trial to be regarded as fair, the child must be able to participate in the process and in the decision making. In other words, to stop adults from marginalising the people affected by the decisions they take, a

model of justice must be promoted which creates a sufficient climate of trust for young people to express themselves freely and offer their own perspective on what has happened. And participation cannot be promoted if a minimum of information about what the rules of the game are is not previously provided. Therefore, adults must first explain what is happening to the young people, what is going to happen, and what is expected of them. On the other hand, young people will only understand the meaning of the decisions and measures being taken if they participate, and, only when this happens will the measure have a more educational and responsibility-oriented scope than if it were imposed in a context that was incomprehensible for them.

### 3.2. Participation by young people in juvenile justice

As we have suggested, one of the most innovative ideas from the Convention on the Rights of the Child (1989) was the rejection of the idea of children as objects to be taken care of and protected, in favour of understanding that they must also be regarded as legal subjects who must have rights recognised, rights of protection and participation and have their rights promoted. Indeed, Krappmann (2010, p. 502) stated that:

The notion of participation captures an essential feature of the Convention. The Convention highlights that the child is a human being, who has the right to be respected as a unique individual with an own perspective and personal intentions by fellow human beings and also by the state, its institutions and other organizations.

In the field of juvenile justice, the Committee on the Rights of the Child has accepted that the very position that children are criminally responsible means recognising that they are “competent and able to effectively participate in the decisions’ made about infringements of the criminal law” (Kilkelly, 2008, p. 41).

The Convention has, at least, prevented decisions from being taken paternalistically for the good of the child. Instead they take into account their ‘best interest’, which requires knowing their opinion on the matter (Committee on the Rights of the Child, 2013). Here, one of the main difficulties lies in knowing how to integrate appropriately the young person’s opinions and desires in a decision which the judge must take in accordance with his or her best interest. In any case, as a minimum, for the young person to feel like a participant, the judge must be able to explain the distance between his or her wishes and the reasons behind the decision finally imposed. It has rightly been noted that, in the end, it is the adults who decide when and how the young people can participate (Bernuz & Dumortier, 2018). Therefore, Cordero (2015, p. 292) suggests that it will be necessary to be vigilant to avoid excessively protected participation.

Nonetheless, and despite the difficulty, participation by young people in the procedure is possible, and to achieve this, some considerations supranational authorities have noted must be taken into account. Consequently, in General Comment 12 the Committee on the Rights of the Child (2009) stated that participation by people

involved in proceedings means that there should be a dialogue based on mutual respect in which all individuals can express their version of what happened and that what is expressed in this dialogue will decide the final outcome. Furthermore, it also insisted that for this to happen, the interactions must occur in a context that can inspire trust and it is very important that the young people perceive that the adults are willing to listen to their version of events and take it seriously. To do so, it might be necessary for the legal agents to modify their normal way of proceeding. Therefore, they should omit some formalities (language, gowns, etc.) in their behaviour, speak to children in an informal and sufficiently intimate setting (away from other professionals who work in the judicial system), so that children feel comfortable and can express themselves freely and without pressure, and they should allow children to be accompanied by their parents or appear alone if they prefer. That said, as recommendations on child friendly justice have noted, someone (preferably their lawyers) must explain to young people that the fact the judge is listening does not mean that their version of events will prevail. Likewise, when final decisions are reached, the judge must explain to the young people how their views were taken into account and what reasons led her to impose a particular measure.

Finally, as noted above, for young people to be able to participate effectively in the process, as well as the adaptations already noted, it is vital that they understand the procedure well and know what the scope of the actions that are going to

be carried out is. In this way, the children's right to information becomes a crucial aspect which the juvenile justice system must guarantee. Indeed, when children are not adequately informed, their feelings of injustice increase because they are obliged to participate in a procedure whose scope they do not understand. This feeling of injustice extends to all of the institution, to the decisions taken, and the measures imposed. The recommendations of the Council of Europe already insisted on this, as does Directive 800/2016 *on procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings* which must be transposed into Spain's legal framework before the end of 2019.

There are two crucial aspects for the information to be produced effectively and for the pedagogical action of juvenile justice to be promoted. On the one hand, the information should be adapted to the maturity and cultural level of the adolescents, and to do so it will be necessary for the legal actors to be capable of making the necessary changes in register and have materials available to facilitate young persons' understanding (Vandekerckhove & O'Brien, 2013). On the other hand, the information should be sufficiently detailed and explicit for young people to be able to take their place in the proceedings and be able to predict what will happen and what is expected of them. Consequently, it is necessary to explain at every stage of the procedure, how long it will last, what is going to happen, who will be involved, and what their role is. Young people, in order to understand and decide in the best way in the procedure, need to know what is happening, what is

going to happen in the future, what the different options presented to them are, and the consequences of each one of them.

It is important to remember that the reasons for encouraging children's participation in juvenile justice include the potential impact (direct or indirect) on preventing reoffending. It is true that the main aim of juvenile justice –preventing recidivism– involves accepting responsibility for the offences committed. Ways of achieving this range from designing measures with content that considers in greater depth the reasons and/or causes for the offence and which enable young people to comprehend what they have done and the consequences of their actions, but they are also related to young people's participation throughout the process, which allows them to “improve their self-image, expanding their personal, affective, and relational resources, boosting their self-esteem and capacity to decide in public affairs” (Caride & Varela, 2015, p. 156).

Furthermore, we have already noted that for the judicial measures to be effectively educational and responsibility-oriented and achieve their medium and long-term objectives, they require a certain degree of cooperation from the young person. More specifically, participation by young people in the process that enables them to understand better why they have reached that point and why a given legal measure is being applied, is necessary. We already said before that:

If young people participate in the decision making, are made participants in it, are listened to and kept informed, and



the decision is explained to them, they will better understand the underlying reasons, will cooperate more with institutions they perceive as more just, and their compliance with the measures will possibly have better and longer-lasting results than a measure that is imposed... This objective will only be attained in the medium and long-term if the young people feel like participants in the decisions being taken in juvenile justice proceedings (Fernández-Molina & Bernuz, 2018, p. 191).

#### 4. The protagonists of the system

Finally, for the system's pedagogical action to be a success and to ensure that all of the desired effects are effectively achieved, it is important to refer to the actions of the agents involved in the system and the perceptions of young offenders. In recent decades, academic literature has called attention to the importance of the perception of the justice of the proceedings for anyone interacting with the legal authorities. Largely because these perceptions shape citizens' attitudes to the penal system and laws. This is especially important when we speak of young people because, this way, their judicial experience can become an experience of legal socialisation (Fagan & Tyler, 2005) enabling them to form an image of the law and the legal system and whether or not they can be regarded as legitimate. Therefore, professionals have to make the legal experience not just a learning opportunity but also an exercise in reaffirming the legitimacy of the legal institution (Tyler & Trinkner, 2017). Evidently, legal decisions imposed by institutions regarded as legitimate will be complied with more willingly.

#### 4.1. The professionals' actions: the commitment to equity and specialisation

In accordance with the above, each agent has a decisive role in the educational function of juvenile justice. Consequently, it is necessary to start by noting which elements academic literature has identified as appropriate for ensuring the action is seen as legitimate by people who interact with the legal system (Tyler, 2006; Bottoms & Tankebe, 2012). Specifically, it indicates that there are two aspects to consider: quality of decision making, and quality of treatment (Tankebe, 2013).

Firstly, the agents have to guarantee that the decisions taken throughout the procedure are equitable, in other words, the young people must see that the legal authorities have been impartial and honest when deciding on a solution or opting for a specific response, and that their prejudices or individual views have not prevailed in the final decision. This can be especially complicated in the juvenile justice system, which is by definition individualised and which takes into account not only the nature of the actions committed but also the psycho-social circumstances of the young offender. This means the same offence can be punished very differently depending on the circumstances of the case. Consequently, it is important to share the reasoning behind the decision with the young people so that they understand it. Furthermore, it will be very important for professionals to foster interpersonal justice in their interventions with young people, taking into account the opinions of all of the people involved and, especially, those of the young people who are the

object of the pedagogical action, treating them with dignity and respect. This is especially important because young people as a group are very keen to be treated like adults and for their views to be taken into consideration (Peterson-Badali, Care, & Broeking, 2007; Rap, 2013; Woolard, Harvell, & Graham, 2008). In addition, as a group they are wary of everything that comes from the adult world, which they mistrust.

Therefore, the only practical option for mutual understanding is to enable channels for effective participation and communication between young people and professionals. This will only be possible if they have been properly trained to this end. All of the supranational and national legislation concerning childhood emphasises the need for all professionals, especially legal practitioners, to have specialist training in the field of children. And not just regarding knowledge of the regulatory framework established for young offenders, but also the ability to understand the peculiarities of children, their developmental stage, their cognitive level, their psychosocial maturity, and in particular, to use tools to communicate effectively with young people that allow them to interpret what they are feeling and expressing while being attentive to whatever they transmit through verbal and non-verbal language.

#### 4.2. Young people's perceptions of the system and its legitimacy

Ultimately, and in line with what is stated above, the juvenile justice system cannot act without taking into consideration the people who are the object of its

intervention as it would lose a major part of its educational scope. This assumes that it is necessary to make an effort to understand their perspective and find out their opinion of their judicial experience. In this sense, research performed until now reminds us that there are still many areas to improve and which require serious consideration. In fact, it shows that perceptions of the equity of proceedings are not very high (Peterson-Badali, Care, & Broeking, 2007; Sprott & Greene, 2010), especially those relating to participation (Kilkelly, 2010; Rap, 2013). Research also shows that young people with the most experience of it have the worst opinions of the justice system (Woolard, Harvell, & Graham, 2008). In Spain, recent research has emphasised that young people are not entirely satisfied with the legal experience and it has been shown that satisfaction is directly related to perceptions of the equity of the proceedings, thus confirming that these perceptions are important for the children's views of it. Consequently, many of them particularly focus on the actions of the police and, despite regarding it as impartial and honest in its decision making, they are very critical of the personal treatment they receive, which they regard as lacking in respect (Pérez, Becerra, & Aguilar, 2018). In effect, although the police does not have a specific pedagogical function, it is the most visible aspect of the penal system and therefore the part with the most important role in forming an image of the system as a whole. Young people in Spain who have interacted with the police have a more negative perception than those who have not (Baz & Fernández-Molina, 2017).

Similarly, young people who have been subject to criminal proceedings regard being listened to as very important and they especially value having their opinion taken into account (Fernández-Molina, Bermejo, & Baz, 2018). Similarly, they have a very positive view of having what is happening and why explained to them throughout the procedure (Pérez, Becerra, & Aguilar, 2018). Therefore, it appears to be important for people who work in the juvenile justice system to foster the legal competence of the young people to improve their perceptions and satisfaction (Fernández-Molina, Bermejo, & Baz, 2018; Pérez, Becerra, & Aguilar, 2018). This is especially so because we should recall that their willingness to comply with measures they regard as correct and appropriate increases as their perception of the system improves.

## 5. Conclusions

This work has tried to examine in greater depth the idea that the pedagogical action of juvenile justice occurs not just at the final moment after the legal action has been imposed. For a responsibility oriented juvenile justice model which distances itself from the justice and welfare models, it is important that the punishment has medium-term aims, which will only be achieved when the measure is regarded as fair by the young person. To this end, the judge must select a measure in proportion to the offence committed, although to be educational, the measure must take into account the young person's psychosocial circumstances. Furthermore, the measure will be regarded as more fair when it is imposed through a procedure that encourages procedural

and interpersonal justice and implemented by professionals who act as examples of what is being demanded of the young person. The empirical research carried out has shown that children are attentive to how justice and its professionals operate and this is one of the elements they use to classify it as right or wrong. Only when the children understand that the justice system is fair will they accept the decisions taken by its operators as trustworthy. And only in this case will they be willing to understand that they have to fulfil them, thus increasing the educational impact of the measure.

It is not easy to educate in a hostile setting like juvenile justice and, as a minimum, it requires cooperation with the young people and their families. This cooperation is achieved, among other matters, by encouraging accessible justice which makes young people feel more comfortable during the procedure and makes them want to participate and by training professionals who know how to interact appropriately with the young people, who know how to listen to them, and who understand what they want to say. In this context, the feeling of justice and of being treated with dignity and respect can also be a powerful pedagogical tool.

## Notes

<sup>1</sup> Ortega (2004, p. 10) states that "It is not possible to educate without recognising the other (the student), without the will to accept. And neither is it possible to educate (illuminate something new) if the student does not see in the educator that she is recognised as somebody with whom there is a desire to establish an ethical relationship, and as somebody who is accepted for what she is in her entirety, not just for what she does or produces".

<sup>2</sup> As Bárcena and Melich note (2003, p. 207 and 210): “an education of the view from the victim is an education [...] which diverts the attention and the sense of the view from the space occupied by the self to the space occupied by the other [...]. It is educating from the experience of the person who endures and suffers the injustice.”

<sup>3</sup> It starts from the idea that “ethical responsibility towards others, even strangers, means that living is not a ‘private’ matter, but one which has inevitable repercussions while we continue to live in society. It means, in one word, that nobody can be indifferent to me” (Ortega 2004, p. 14).

<sup>4</sup> On 17 November 2010 the Committee of Ministers of the Council of Europe developed *Guidelines on child friendly justice*.

## References

Álvarez Fernández, M. V., Pintado Rey, V. R., & San Fabián Maroto, J. L. (2014). Elaboración de propuestas didácticas orientadas a mejorar los programas socioeducativos para jóvenes en situación de riesgo social. *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria*, 23, 151-173.

Bárcena, F., & Melich, J. C. (2003). La mirada ex-céntrica. Una educación desde la mirada de la víctima. In J. M. Mardones & R. Mate (Eds.), *La ética ante las víctimas* (pp. 195-218). Barcelona: Anthropos.

Baz, O., & Fernández-Molina, E. (2017). Process-based model in adolescence. Analyzing police legitimacy and juvenile delinquency within a legal socialization framework. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 24 (3), 237-252.

Bernuz Beneitez, M. J. (2015). El derecho a ser escuchado: el caso de la infancia en conflicto con la norma. *Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas*, 33, 67-98.

Bernuz Beneitez, M. J., & Dumortier, E. (2018). Why children obey the law: Rethinking juvenile justice and children’s rights in Europe through procedural justice. *Youth Justice*, 18 (1), 34-51.

Bernuz Beneitez, M. J., Fernández Molina, E., & Pérez Jiménez, F. (2009a). Educar y controlar: la intervención comunitaria en la justicia de menores. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 11 (12), 1-28.

Bernuz Beneitez, M. J., Fernández Molina, E., & Pérez Jiménez, F. (2009b). La libertad vigilada como medida individualizadora en la justicia de menores. *Revista Española de Investigación en Criminología*, 7, 1-27.

Birckhead, T. (2009). Toward a theory of procedural justice for juveniles. *Buffalo Law Review*, 57, 1447-1513.

Bottoms A., & Tankebe, J. (2012). Beyond procedural justice: A dialogic approach to legitimacy in criminal justice. *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 102 (1), 119-253.

Caride Gómez, J. A., & Varela Crespo, L. (2015). La pedagogía social en la vida cotidiana de los jóvenes: problemáticas específicas y alternativas de futuro en un mundo globalizado. *Perspectiva educacional. Formación de profesores*, 54 (2), 150-164.

Committee on the Rights of the Child (2007). *Observación General n° 10. Los derechos del niño en la justicia de menores*. Ginebra: Naciones Unidas.

Committee on the Rights of the Child (2009). *General comment no. 12. The right of the child to be heard*. Geneva: United Nations.

Committee on the Rights of the Child (2013). *General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration*. Geneva: United Nations.

Cordero Arce, M. (2015). Maturing children’s rights theory. From children, with children, of children. *International Journal of Children’s Rights*, 23 (2), 283-331.

Dünkel, F. (2014). Juvenile Justice Systems in Europe. Reform developments between justice, welfare and ‘new punitiveness’. *Kriminologijos studijos*, 1 (1), 31-76.

Fagan, J., & Tyler, T. (2005). Legal socialization of children and adolescents. *Social Justice Research*, 18 (3), 217-242.

Feld, B. (2006). Juveniles’ Competence to exercise Miranda Rights: An empirical study of police and practice. *Minnesota Law Review*, 91 (26), 26-100.

Fernández-Molina, E. (2008). *Entre la educación y el castigo. Un análisis de la justicia de menores*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Fernández-Molina, E. (2012). El internamiento de menores. Una mirada hacia la realidad de su práctica en España. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 14 (18), 1-20.



- Fernández-Molina, E. (2014). Repensando la justicia de menores. In F. Miró, J. R. Agustina, J. E. Medina, & L. Summers (Eds.), *Crimen, oportunidad y vida diaria. Libro homenaje al Profesor Dr. Marcus Felson* (pp. 613-647). Madrid: Dykinson.
- Fernández-Molina, E., Bermejo, M. R., & Baz, O. (2018). Percepciones de los jóvenes infractores sobre la justicia de menores. *Revista Española de Investigación Criminológica*, 16, 1-25.
- Fernández-Molina, E., & Bernuz, M. J. (2018). *Justicia de menores*. Madrid: Síntesis.
- Gargarella, R. (2012). Injusticia penal, justicia social. In R. Gargarella (Ed.), *El castigo penal en sociedades desiguales* (pp. 119-142). Buenos Aires: CIEPP.
- Gomá Lanzón, J. (2015). *Imitación y experiencia*. Madrid: Taurus.
- Grisso, T., & Schwartz, R. G. (2000). *Youth on Trial: A Developmental Perspective on Juvenile Justice*. Chicago: University of Chicago Press.
- Grisso, T., Steinberg, L., Woolard, J., Cauffman, E., Scott, E., Graham, S., & Schwartz, R. (2003). Juveniles' competence to stand trial: A comparison of adolescents' and adults' as trial defendants. *Law and Human Behaviour*, 27 (4), 333-366.
- Kilkelly, U. (2008). Youth courts and children's rights: the Irish experience. *Youth Justice*, 8 (1), 39-56.
- Kilkelly, U. (2010). *Listening to children about justice: Report of the Council of Europe consultation with children on child-friendly justice*. Strasbourg: Council of Europe.
- Krappmann, L. (2010). The weight of the child's view (article 12 of the Convention on the Rights of the Child). *International Journal of Children's Rights*, 18, 501-513.
- Larrauri, E. (2015). *Introducción a la criminología y al sistema penal*. Madrid: Trotta.
- Monahan, K., Steinberg, L., & Piquero, A. (2015). Juvenile Justice Policy and Practice: A developmental perspective. *Crime and Justice*, 44 (1), 577-619.
- Ortega Ruiz, P. (2004). La educación moral como pedagogía de la alteridad, **revista española de pedagogía**, 62 (227), 5-30.
- Ortega Ruiz, P., & Romero Sánchez, E. (2013). La experiencia de las víctimas en el discurso pedagógico. *Teoría Educativa*, 25 (1), 63-77.
- Pérez, F., Becerra, J., & Aguilar, A. (2018). Cómo perciben los menores infractores la justicia que se les aplica: un acercamiento desde la justicia procedimental. *Revista Española de Investigación Criminológica*, 16, 1-26.
- Peterson-Badali, M., Care, S., & Broeking, J. (2007). Young People's Perceptions and Experiences of the Lawyer-Client Relationship. *Canadian Journal of Criminology & Criminal Justice*, 49 (3), 375-402.
- Rap, S. (2013). *The participation of juvenile defendants in youth courts*. Utrecht: University Utrecht.
- Sprott, J. B., & Greene, C. (2010). Trust and confidence in the courts does the quality of treatment young offenders receive affect their views of the courts? *Crime & Delinquency*, 56 (2), 269-289.
- Steinberg, L. (2013). The influence of neuroscience on US Supreme Court decisions about adolescents' criminal culpability. *Nature Reviews Neuroscience*, 14 (7), 513-518.
- Steinberg, L., & Scott, E. S. (2003). Less guilty by reason of adolescence: developmental immaturity, diminished responsibility, and the juvenile death penalty. *American Psychologist*, 58 (12), 1009-1018.
- Tankebe, J. (2013). Viewing things differently: The dimensions of public perceptions of police legitimacy. *Criminology*, 51 (1), 103-135.
- Tyler, T. (2006). *Why people obey the law?* Chelsea: Yale University Press.
- Tyler, T., & Trinkner, R. (2017). *Why Children Follow Rules*. Oxford: Oxford University Press.
- Vandekerckhove, A., & O'Brien, K. (2013). Child-Friendly Justice: turning law into reality. *Europäische Rechtsakademie Academy*, 14, 523-541.
- Weijers, I. (2002). The Moral Dialogue: a Pedagogical Perspective on Juvenile Justice. In I. Weijers, & A. Duff (Eds.), *Punishing juveniles. Principle and critique* (pp. 135-154). Oxford: Hart Publishing.
- Woolard, J. L., Harvell, S., & Graham, S. (2008). Anticipatory injustice among adolescents: age and racial/ethnic differences in perceived unfairness of the justice system. *Behavioral Sciences & the Law*, 26 (2), 207-226.



## Authors' biographies

**María José Bernuz Beneitez** has a doctorate in law. She is an Associate Professor in Philosophy of Law and a Researcher in the Legal Sociology Laboratory at the Universidad de Zaragoza. Her research into juvenile justice started with her doctoral thesis and has continued with national and European projects on the topic (Youprev), as well as cooperation with criminology research groups in Albacete, Brussels (VUB), and Porto. Along with this line of research, she has also worked on security, gender-based violence, and animal rights policies.

 <https://orcid.org/0000-0001-7723-5172>

**Esther Fernández Molina** is an Associate Professor at the Universidad de Castilla-La Mancha. She is the Director of the Criminology Research Centre and is head of the Consolidated Research Group in Criminology and Juvenile Delinquency of the Universidad de Castilla-La Mancha. Her main lines of research are juvenile justice, crime trends in delinquency, and public perceptions of crime (fear of crime, attitudes to juvenile punishment, and attitudes towards penal institutions).

 <https://orcid.org/0000-0002-3103-0232>

# Table of Contents

## Sumario

### Educational and civic-penal responses to antisocial behavior

#### **Respuestas educativas y cívico-penales a los comportamientos antisociales**

Guest editor: Fernando Gil Cantero  
*Editor invitado: Fernando Gil Cantero*

#### **Fernando Gil Cantero**

Introduction: Educational and civic-penal responses to antisocial behavior

*Presentación: Respuestas educativas y cívico-penales a los comportamientos antisociales* 209

#### **David Reyero, Fernando Gil Cantero**

Education that limits is education that frees  
*La educación que limita es la que libera* 213

#### **María José Bernuz Beneitez, Esther Fernández Molina**

The pedagogy of juvenile justice: a child-friendly justice  
*La pedagogía de la justicia de menores: sobre una justicia adaptada a los menores* 229

#### **Marina Martins, Carolina Carvalho**

What do teenagers lie about?  
*¿En qué mienten los adolescentes?* 245

#### **Inmaculada Méndez, Cecilia Ruiz Esteban, Juan Pedro Martínez, Fuensanta Cerezo**

Cyberbullying according to sociodemographic and academic characteristics among university students  
*Ciberacoso según características sociodemográficas y académicas en estudiantes universitarios* 261

#### **Irene Montiel, José R. Agustina**

Educational challenges of emerging risks in cyberspace: foundations of an appropriate strategy for preventing online victimization  
*Retos educativos ante los riesgos emergentes en el ciberespacio: claves para una adecuada prevención de la cibervictimización en menores* 277

#### **Maialen Garmendia Larrañaga, Estefanía Jiménez Iglesias, Nekane Larrañaga Aizpuru**

Bullying and cyberbullying: victimisation, harassment, and harm. The need to intervene in the educational centre  
*Bullying y cyberbullying: victimización, acoso y daño. Necesidad de intervenir en el entorno escolar* 295

**Ana Rosser-Limiñana, Raquel Suriá-Martínez**

School adaptation and behavioural and emotional problems in minors exposed to gender violence  
*Adaptación escolar y problemas comportamentales y emocionales en menores expuestos a violencia de género* **313**

**Fanny T. Añaños-Bedriñana, Miguel Melendro**

**Estefanía, Rocío Raya Miranda**  
Young women with protective and judicial measures and their transit towards prison  
*Mujeres jóvenes con medidas de protección y judiciales y sus tránsitos hacia la prisión* **333**

**Book reviews**

---

**Esteban Bara, F. *Ética del profesorado* [Ethics of teaching staff] (Juan García Gutiérrez). **García Amilburu, M., Bernal, A., & González Martín, M. R.** *Antropología de la educación. La especie educable* [Anthropology of education. The educatable species] (Yaiza Sánchez Pérez). **Rose, D., & Martin, J. R.** *Leer para aprender. Lectura y escritura en las áreas del currículo* [Learning to write/reading to learn: Genre knowledge and pedagogy in the Sydney School: scaffolding democracy in Literacy Classrooms] (Francisco Lorenzo Bergillos). **Buxarrais, M. R., & Vilafranca, I. (Coords.)**. *Una mirada femenina de la educación moral* [A feminine view of moral education] (Eric Ortega González). **351****

This is the English version of the research articles and book reviews published originally in the Spanish printed version of issue 273 of the **revista española de pedagogía**. The full Spanish version of this issue can also be found on the journal's website <http://revistadepedagogia.org>.



ISSN: 0034-9461 (Print), 2174-0909 (Online)

<https://revistadepedagogia.org/>

Depósito legal: M. 6.020 - 1958

INDUSTRIA GRÁFICA ANZOS, S.L. Fuenlabrada - Madrid

# The pedagogy of juvenile justice: a child-friendly justice \*

## La pedagogía de la justicia de menores: sobre una justicia adaptada a los menores

María José BERNUZ BENEITEZ, PhD. Associate Professor. Universidad de Zaragoza ([mbernuz@unizar.es](mailto:mbernuz@unizar.es)).

Esther FERNÁNDEZ MOLINA, PhD. Associate Professor. Universidad de Castilla-La Mancha ([esther.fdez@uclm.es](mailto:esther.fdez@uclm.es)).

### Abstract:

This article considers the educational opportunities offered by juvenile justice interventions when a young person has committed a criminal offence. Given that the response occurs in an environment that is not child-friendly, this text identifies the elements that legitimise this justice system and make children perceive it as a fair and appropriate response to their criminal behaviour. The need for punishment which is educational and responsibility-oriented is noted, as is the need for appropriately trained professionals to promote young people's participation in the procedure and improve their legal competence, based on the fact that passing through the criminal procedure can be an experience of legal socialisation for young people

and in order for the pedagogical action of justice to be effective. Only in this way will juvenile offenders have a positive perception of the judicial experience, which offers an opportunity to improve their attitudes towards the law and the system. In short, this article comprises a reflection on the importance of the pedagogical action that juvenile justice deploys throughout the whole procedure and how its success can legitimise the intervention by a specialized criminal system and encourage young people to understand and accept its educational sense.

**Keywords:** juvenile justice, legitimacy, pedagogy, access to justice, participation, child friendly justice.

---

\*This work derives from the development of two research projects that have received public funding: "Ciudadanos y justicia penal. Un análisis de la opinión de los ciudadanos sobre el sistema penal" (Citizens and criminal justice: an analysis of citizens' views of the criminal justice system) (DER2015-67184-R), funded by the State Programme for R&D Focussing on Social Challenges of Spain's Ministry of the Economy and "Justicia penal para todos. Un estudio del funcionamiento y la accesibilidad de la justicia penal" (Criminal justice for all: a study into the functioning and accessibility of criminal justice) funded by the Council of Education, Culture and Sports of the Government of Castilla-La Mancha.

Revision accepted: 2019-02-06.

This is the English version of an article originally printed in Spanish in issue 273 of the **revista española de pedagogía**. For this reason, the abbreviation EV has been added to the page numbers. Please, cite this article as follows: Bernuz Beneitez, M. J., & Fernández Molina, E. (2019). La pedagogía de la justicia de menores: sobre una justicia adaptada a los menores | *The pedagogy of juvenile justice: a child-friendly justice*. *Revista Española de Pedagogía*, 77 (273), 229-244. doi: <https://doi.org/10.22550/REP77-2-2019-02>

<https://revistadepedagogia.org/>

ISSN: 0034-9461 (Print), 2174-0909 (Online)

revista española de pedagogía  
year 77, n. 273, May-August 2019, 229-244



## Resumen:

Este artículo ahonda en las oportunidades educativas que ofrece el propio proceso judicial, cuando un joven ha cometido una infracción penal. Siendo conscientes de que la respuesta se produce en un entorno poco amigable para la adolescencia, en este texto se señalan aquellos elementos que legitiman este sistema de justicia y hacen que los menores lo puedan percibir como justo y adecuado para responder a su comportamiento delictivo. Partiendo de que el paso por el procedimiento penal puede ser una experiencia de socialización legal para los menores y precisamente para que la acción pedagógica de la justicia surta efecto, se reivindica no solo la necesidad de un castigo esencialmente educativo y responsabilizador, sino también de unos profesionales debidamente formados que promuevan la participación del

joven en el procedimiento y mejoren su competencia legal. Solo así será posible que la experiencia judicial vivida por los menores infractores sea percibida positivamente y suponga una oportunidad de aprendizaje que mejore las actitudes de aquellos hacia la ley y el sistema. En definitiva, se propone una reflexión sobre la importancia de la acción pedagógica que la justicia de menores despliega a lo largo de todo el procedimiento y de cómo su éxito logra legitimar la intervención de un sistema penal especializado y favorecer que el menor entienda y acepte su sentido educativo.

**Descriptor:** justicia de menores, legitimidad, pedagogía, justicia accesible, participación, justicia adaptada al menor, percepciones de justicia.

---

*“Leading by example means that the example leads”*

(Gomá, 2015, p. 574)

## 1. Pedagogy in the juvenile justice system or the judicial process as pedagogy

Spain's juvenile justice system is currently constituted as a specialist jurisdiction which works with children between the ages of fourteen and eighteen who commit any of the offences listed in Spain's penal code. Its specialisation derives from the type of population with which it works, a group which has some special requirements as it is in a process of maturing and social integration. From another angle, it is necessary to consider that it works with

a group with a greater capacity for learning and change. This means that juvenile justice approaches the intervention with the young person as a teaching opportunity which, to a greater or lesser extent, supports the child's development towards a prosocial adult life, avoiding recidivism and the consolidation of a criminal career or, more modestly, fostering taking responsibility for the acts committed and the damage caused, thus channelling the process of social integration. Ultimately, it is an educational opportunity which, in order to fulfil its function, must take into account the young person's situation, and to be perceived as fair, it must be proportionate to the seriousness and circumstances of the offence. Ortega and Romero (2013, p. 76) note that educational processes are



“a long process of learning... to live ethically, in other words, responsibly”.

One of the core questions in juvenile justice is how to achieve these objectives of encouraging responsibility and ensuring that the young person takes advantage of the educational opportunity. Much of the literature, both criminological and pedagogical, has focussed on the educational content of the legal measures imposed at the end of the legal process. When we speak of the legal measures, whether these involve internment or an open setting, one important matter to determine is what to teach, which elements to work on, where to focus attention and, above all, how to do so. Experts have emphasised that it is vital to encourage young people to take responsibility for the offences committed, recognise the consequences and effects of their actions on others, and, insofar as it is possible, make amends for the damage caused and/or respond through the legal measures the judge deems appropriate (Dünkel, 2014). Similarly, it has been shown that it is advisable to reduce internment to a minimum (especially in closed centres), limiting it to the most serious cases and always for the shortest possible time, precisely because of its limited educational value (Fernández-Molina, 2012) and because of the paradox of educating about how to live in society while separated from it. Consequently, juvenile justice has established a range of responses based on educational interventions with young people in their normal environment (family, school, friends, etc.), which judges choose taking into consideration the children's psychosocial situation and the

nature of the offence committed (Fernández-Molina & Bernuz, 2018). The fact is, as Ortega and Romero observe (2013, p. 75), for education to be effective, it must take into account the learner's circumstances. They state that “it is not possible to educate without knowing the situation and context in which the learner lives, or by attempting to provide a universally applicable education which disregards the learner's particular characteristics”.

Similarly, it is clear that the educational action juvenile justice aims to provide largely depends on the efforts of professionals who work with young people during the implementation of these legal measures. Their role is to give educational content to the punishment imposed by the judge and monitor the children's progress while the measures are being implemented. And this must be done taking into account the fact that the conditions for educational intervention in juvenile justice are not always ideal. Firstly, the population is a captive one which has not chosen to be there, which might have a more or less significant history of educational failure and behavioural problems, and which has no choice of whether to comply with the legal measures imposed. And, as in any other setting which aims to be educational and have medium and long-term effects, the professional has to have a certain degree of cooperation with the young person<sup>1</sup>. And if not cooperation, then a favourable attitude, a certain motivation, and a predisposition to learn or to change are necessary, as are social conditions that support the young person in this change.

This will, in part, be achieved with a scheme for activities young people can perform which are at least minimally pleasing to them, and which, above all, are meaningful to them (Álvarez, Pintado, & San Fabián 2014, p. 170). On these lines, Weijers states (2002, p. 145) that the measures will only have an educational effect when the offender believes they are justified. And this will happen, again in part, as a result of the “dialogue” which has occurred in the various judicial channels and in which the child must participate actively. In a way, the pedagogy of juvenile punishment can also be understood as a learning methodology which is mindful of the process of teaching and of the different forms, moments, and professionals that might be involved in it. In this broader way of understanding the educational task, all of the agents involved with the juvenile throughout the legal process have a great responsibility. As Ortega said (2004), any professional relationship with the child must become an *educational situation*.

Going a step further, there has been a focus on emphasising that passing through the juvenile justice system could be a (positive or negative) experience of legal socialisation (Fagan & Tyler, 2005), one in which young people acquire knowledge of the legal and judicial systems and have their attitudes towards them shaped (Tyler & Trinkner, 2017). Indeed, children come into contact with a variety of professionals (police, legal, and social) when subjected to a legal proceeding. Each interaction is a chance to learn, and the educational role all professionals acquire obliges them to be aware of the impact of their actions on the

perceptions and attitudes the adolescent develops towards the system as a whole.

This is a perspective which relates to the regarding of professionals and their actions as educational examples. As Gomá (2015, pp. 570-571, 573) notes

if their behaviour reveals a virtue higher than mine, the example condemns me and denounces my culpability; if its merit is less than mine, its example excuses and absolves me... Anyone who is an example of what they teach will have *auctoritas*.

If the aim is for the educational and responsibility-oriented objectives of the judicial measures to go beyond the coercion used to impose them, it is, among other matters, necessary that the young people see the professionals as legitimate authorities in general and, in particular, as entitled to educate and teach. And, ultimately, that they see the juvenile justice system as fair.

In this work, we will reflect on the different educational possibilities offered by the intervention carried out through juvenile justice. We will briefly consider the importance of the purpose of the punishment and the essential requirements the system must guarantee to ensure it is educational. We will focus on defining the most relevant aspects that promote the pedagogical action of juvenile justice, especially, the fact that all professionals in the system must ensure that the young people participate actively in the process so that their opinions are taken into account in the final decisions and so that they understand the meaning of the measures finally imposed. Similarly, we will illustrate the importance of the consequenc-

es of professional and specialised treatment by the agents in the system, which is apparent when analysing young people's perceptions of their passage through the system.

## 2. The educational purpose of punishment in juvenile justice

Throughout its history, juvenile justice has used a range of ways to define childhood, understand its offences, and react to them. It is clear that these questions are connected and the response to juvenile delinquency and the meaning of the punishment can only be understood when seen in relation with how childhood and adolescence are understood. From this perspective, four major (more or less pure) models in juvenile justice have been identified: the welfare model, the justice model, the restorative model, and the responsibility-oriented model (among others, Fernández-Molina, 2008).

The welfare model appears with juvenile justice at the start of the 20th century, in an effort to offer a special response to a different population. It is based on the assumption that, as children are in a formative stage, they have a series of physical, psychological, emotional, and social deficiencies which are at the root of their criminal behaviour, and so juvenile justice interventions must be aimed at working on these factors to avoid possible recidivism. In this model, as children are viewed as passive subjects, decisions are taken without the need for their involvement or for their opinions to be valued and without seeking their cooperation in the educational process, which tends towards authoritarianism "for the good of the child".

The deficiencies and punitive excesses created by the zeal to intervene in young people's psycho-social circumstances, led to the need to consider primarily the offence committed when designing the response to it being raised (Gargarella, 2012). This approach has not been prevalent in juvenile justice nor has it been provided for most of the people who come before the juvenile justice system. Nonetheless, it is a retributive perspective. This is most obviously apparent when more severe punishments are demanded for young people who commit more serious offences. On these occasions, it seems to argue in simplistic terms, identifying the ability to offend with the competence to understand the offence and any damage caused. And, if it assumes that the young people understand what they have done, it also demands that measures more in accordance with the circumstances and seriousness of the offences and less attentive to their personal and psycho-social circumstances be imposed on them. This perspective, however, ignores the fact that children are in a formative process in all areas, which justifies specific intervention by specialist institutions until they are of legal age. The severity of the offence committed is not indicative of a greater maturity but, possibly the opposite, of greater vulnerability (Fernández-Molina & Bernuz, 2018).

The restorative model is based on different assumptions. It understands that the offence creates a conflict between the offender(s) and the victim(s) and their families. It assumes that the best response to this conflict is for the offender to accept responsibility for the harm caused and

make meaningful amends to the victim. It assumes that the best way to achieve these objectives is to bring the offender and the victim together in a process of dialogue so that, with the help of a facilitator, they can speak about the harm caused and discuss the best way to remedy it. This model clearly entails active participation by the child who has offended in the process of accepting responsibility and making amends for the damage through conciliation, redress, or performing services for the benefit of the community (Bernuz, 2015). In a way, it is a case of educating and “teaching in and from the other” (Ortega & Romero, 2013, p. 67), but also of satisfying the interests of the victims. All perspectives are valid when proposing a solution to the harm caused by the offence. It is understood that the victims, through these processes, regain a central role in the resolution of the conflict, at the same time as helping to understand the harm caused through the personal narration of it<sup>2</sup>. This type of intervention stresses the impact of our actions on others<sup>3</sup>. It is a perspective which helps young offenders to escape from their exculpation of themselves to understand the views of the other person who has suffered the consequences of their actions.

Nonetheless, Western countries, including Spain, currently favour the responsibility-oriented model to guide juvenile punishment. This model, which is framed in the postulates of the Convention on the Rights of the Child, regards the child as a legal subject who also has protection, promotion and participation rights. Specifically, Spanish law states that a child aged between fourteen and eighteen who

has committed an offence is responsible from a criminal perspective, but it also understands that as he or she is in a formative process, the measures must have a sanctioning and educational nature. Also, to ensure that the educational objective of the measures has a longer-term impact, there is an aspiration for them to be seen as fair by the young person, making them proportional to the severity of the offence committed. It also aims to make measures more effective by adapting them to the psychosocial circumstances of the child. In any case, it also assumes that the child’s participation in the process is important from a formal and material perspective. From a formal perspective because it considers that for the process to be fair, she or he must participate in it. From a material perspective because if the child participates in the process, this will favour better understanding of the measure and more willing compliance with it. This will be considered in more detail in the next section.

### 3. The pedagogy of a comprehensible and participatory justice

We start from the premise that for juvenile justice to fulfil its pedagogical function, two interconnected requirements must be complied with in all contacts with young people. On the one hand, the system and its procedures must be comprehensible for adolescents, above all taking into account the fact that understanding the functioning and meaning of criminal institutions requires a degree of abstraction which often exceeds the capacities of its subjects. On the other hand, the juvenile

justice system must allow young people to participate throughout the procedure, giving them the option to state their opinions on the decisions the adults will take and which affect them directly as well as involving them in any educational action. It is clear that children will only be able to participate effectively in a juvenile justice system that is accessible to them.

### 3.1. The necessary accessibility of juvenile justice

One of the main problems posed by citizens' acceptance of and involvement in penal institutions in general, and the courts in particular, is the distance between those who deliver justice and those whom it affects. Therefore, the need to improve citizens' access to justice is increasingly being discussed. This lack of access is, if possible, greater when the people on the receiving end of the legal action are children and juveniles. The symbols of the administration of justice, a process with opaque aims, its technical language, and the inertia of a system designed centuries ago and which has not fully adapted to the habits and customs of 21st-century society, make the penal system a hostile space for people interacting with it. It has been noted that the staging of the legal machinery contributes to creating this image of justice as something distant. Wide, cold spaces and characters wearing black robes that make everything uniform make it hard to understand who is who and what each of them expects of the young person on trial. In addition, legal language complicates everything and is the main barrier to access, especially for young people who already have significant difficulties communicating effectively

with the adult world (Fernández-Molina, 2014, p. 625). Therefore, and especially over the last decade, the need to promote a justice adapted to childhood and adolescence (child friendly justice) on the lines proposed by the Council of Europe has frequently been emphasised<sup>4</sup>. In other words, it is a matter of creating a justice system that is close, participatory, and comprehensible for children.

Underlying this initiative is not only the conviction that penal justice must adapt to the new times, but also the confirmation that young people, despite the cognitive maturity they already have during adolescence, start off with certain obstacles to being legally competent, because some aspects still need to be perfected and consolidated for them to become fully adult. Academic literature from the fields of psychology and neuroscience has shown that there is a whole psycho-social dimension relating to emotional aspects concerning self-control of behaviour that are still developing at this stage in life (Steinberg, 2013).

This immaturity has two consequences for our target group. On the one hand, it makes them more prone to become involved in criminal behaviour. The fact that some parts of the brain are still not sufficiently developed causes a genuine inability to control impulses. In addition, young people tend to think essentially in the short term, they have a great sensation of invulnerability and a greater predilection to experience new sensations. This makes them perfect candidates for carrying out risky behaviour (Steinberg & Scott, 2003) which, as Larrauri notes (2015), is some-



times classified as offences. On the other hand, this immaturity means they are less able to behave appropriately during legal proceedings. Understanding the nature and scope of the justice system, the roles of its agents, the meaning of its procedures, or understanding their rights, requires a certain capacity for abstract thought and decision-making competence (Monahan, Steinberg, & Piquero, 2015). So, for example, young people who are tried must decide whether or not to exercise the right to make a statement to the police, and, when applicable, they must decide how far to go in the statement and what to share in court. In the same way, they must decide whether or not they are in agreement with the measures proposed by the prosecutor (Grisso et al., 2003). And while it might seem that children can generally understand all this involves, academic research has shown that they are less able to exercise their rights and that their thinking is less strategic than that of adults as they are worse at evaluating, comparing, and weighting different alternatives (Grisso & Schwartz, 2000) and the consequences of their actions.

Given this inability, the system must make an effort to allow young people who are tried to be able to understand the scope of the action that will affect them and to participate effectively in the process. This participation is important from two perspectives. On the one hand, for the trial to be regarded as fair, the child must be able to participate in the process and in the decision making. In other words, to stop adults from marginalising the people affected by the decisions they take, a

model of justice must be promoted which creates a sufficient climate of trust for young people to express themselves freely and offer their own perspective on what has happened. And participation cannot be promoted if a minimum of information about what the rules of the game are is not previously provided. Therefore, adults must first explain what is happening to the young people, what is going to happen, and what is expected of them. On the other hand, young people will only understand the meaning of the decisions and measures being taken if they participate, and, only when this happens will the measure have a more educational and responsibility-oriented scope than if it were imposed in a context that was incomprehensible for them.

### 3.2. Participation by young people in juvenile justice

As we have suggested, one of the most innovative ideas from the Convention on the Rights of the Child (1989) was the rejection of the idea of children as objects to be taken care of and protected, in favour of understanding that they must also be regarded as legal subjects who must have rights recognised, rights of protection and participation and have their rights promoted. Indeed, Krappmann (2010, p. 502) stated that:

The notion of participation captures an essential feature of the Convention. The Convention highlights that the child is a human being, who has the right to be respected as a unique individual with an own perspective and personal intentions by fellow human beings and also by the state, its institutions and other organizations.

In the field of juvenile justice, the Committee on the Rights of the Child has accepted that the very position that children are criminally responsible means recognising that they are “competent and able to effectively participate in the decisions’ made about infringements of the criminal law” (Kilkelly, 2008, p. 41).

The Convention has, at least, prevented decisions from being taken paternalistically for the good of the child. Instead they take into account their ‘best interest’, which requires knowing their opinion on the matter (Committee on the Rights of the Child, 2013). Here, one of the main difficulties lies in knowing how to integrate appropriately the young person’s opinions and desires in a decision which the judge must take in accordance with his or her best interest. In any case, as a minimum, for the young person to feel like a participant, the judge must be able to explain the distance between his or her wishes and the reasons behind the decision finally imposed. It has rightly been noted that, in the end, it is the adults who decide when and how the young people can participate (Bernuz & Dumortier, 2018). Therefore, Cordero (2015, p. 292) suggests that it will be necessary to be vigilant to avoid excessively protected participation.

Nonetheless, and despite the difficulty, participation by young people in the procedure is possible, and to achieve this, some considerations supranational authorities have noted must be taken into account. Consequently, in General Comment 12 the Committee on the Rights of the Child (2009) stated that participation by people

involved in proceedings means that there should be a dialogue based on mutual respect in which all individuals can express their version of what happened and that what is expressed in this dialogue will decide the final outcome. Furthermore, it also insisted that for this to happen, the interactions must occur in a context that can inspire trust and it is very important that the young people perceive that the adults are willing to listen to their version of events and take it seriously. To do so, it might be necessary for the legal agents to modify their normal way of proceeding. Therefore, they should omit some formalities (language, gowns, etc.) in their behaviour, speak to children in an informal and sufficiently intimate setting (away from other professionals who work in the judicial system), so that children feel comfortable and can express themselves freely and without pressure, and they should allow children to be accompanied by their parents or appear alone if they prefer. That said, as recommendations on child friendly justice have noted, someone (preferably their lawyers) must explain to young people that the fact the judge is listening does not mean that their version of events will prevail. Likewise, when final decisions are reached, the judge must explain to the young people how their views were taken into account and what reasons led her to impose a particular measure.

Finally, as noted above, for young people to be able to participate effectively in the process, as well as the adaptations already noted, it is vital that they understand the procedure well and know what the scope of the actions that are going to

be carried out is. In this way, the children's right to information becomes a crucial aspect which the juvenile justice system must guarantee. Indeed, when children are not adequately informed, their feelings of injustice increase because they are obliged to participate in a procedure whose scope they do not understand. This feeling of injustice extends to all of the institution, to the decisions taken, and the measures imposed. The recommendations of the Council of Europe already insisted on this, as does Directive 800/2016 *on procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings* which must be transposed into Spain's legal framework before the end of 2019.

There are two crucial aspects for the information to be produced effectively and for the pedagogical action of juvenile justice to be promoted. On the one hand, the information should be adapted to the maturity and cultural level of the adolescents, and to do so it will be necessary for the legal actors to be capable of making the necessary changes in register and have materials available to facilitate young persons' understanding (Vandekerckhove & O'Brien, 2013). On the other hand, the information should be sufficiently detailed and explicit for young people to be able to take their place in the proceedings and be able to predict what will happen and what is expected of them. Consequently, it is necessary to explain at every stage of the procedure, how long it will last, what is going to happen, who will be involved, and what their role is. Young people, in order to understand and decide in the best way in the procedure, need to know what is happening, what is

going to happen in the future, what the different options presented to them are, and the consequences of each one of them.

It is important to remember that the reasons for encouraging children's participation in juvenile justice include the potential impact (direct or indirect) on preventing reoffending. It is true that the main aim of juvenile justice –preventing recidivism– involves accepting responsibility for the offences committed. Ways of achieving this range from designing measures with content that considers in greater depth the reasons and/or causes for the offence and which enable young people to comprehend what they have done and the consequences of their actions, but they are also related to young people's participation throughout the process, which allows them to “improve their self-image, expanding their personal, affective, and relational resources, boosting their self-esteem and capacity to decide in public affairs” (Caride & Varela, 2015, p. 156).

Furthermore, we have already noted that for the judicial measures to be effectively educational and responsibility-oriented and achieve their medium and long-term objectives, they require a certain degree of cooperation from the young person. More specifically, participation by young people in the process that enables them to understand better why they have reached that point and why a given legal measure is being applied, is necessary. We already said before that:

If young people participate in the decision making, are made participants in it, are listened to and kept informed, and

the decision is explained to them, they will better understand the underlying reasons, will cooperate more with institutions they perceive as more just, and their compliance with the measures will possibly have better and longer-lasting results than a measure that is imposed... This objective will only be attained in the medium and long-term if the young people feel like participants in the decisions being taken in juvenile justice proceedings (Fernández-Molina & Bernuz, 2018, p. 191).

#### 4. The protagonists of the system

Finally, for the system's pedagogical action to be a success and to ensure that all of the desired effects are effectively achieved, it is important to refer to the actions of the agents involved in the system and the perceptions of young offenders. In recent decades, academic literature has called attention to the importance of the perception of the justice of the proceedings for anyone interacting with the legal authorities. Largely because these perceptions shape citizens' attitudes to the penal system and laws. This is especially important when we speak of young people because, this way, their judicial experience can become an experience of legal socialisation (Fagan & Tyler, 2005) enabling them to form an image of the law and the legal system and whether or not they can be regarded as legitimate. Therefore, professionals have to make the legal experience not just a learning opportunity but also an exercise in reaffirming the legitimacy of the legal institution (Tyler & Trinkner, 2017). Evidently, legal decisions imposed by institutions regarded as legitimate will be complied with more willingly.

#### 4.1. The professionals' actions: the commitment to equity and specialisation

In accordance with the above, each agent has a decisive role in the educational function of juvenile justice. Consequently, it is necessary to start by noting which elements academic literature has identified as appropriate for ensuring the action is seen as legitimate by people who interact with the legal system (Tyler, 2006; Bottoms & Tankebe, 2012). Specifically, it indicates that there are two aspects to consider: quality of decision making, and quality of treatment (Tankebe, 2013).

Firstly, the agents have to guarantee that the decisions taken throughout the procedure are equitable, in other words, the young people must see that the legal authorities have been impartial and honest when deciding on a solution or opting for a specific response, and that their prejudices or individual views have not prevailed in the final decision. This can be especially complicated in the juvenile justice system, which is by definition individualised and which takes into account not only the nature of the actions committed but also the psycho-social circumstances of the young offender. This means the same offence can be punished very differently depending on the circumstances of the case. Consequently, it is important to share the reasoning behind the decision with the young people so that they understand it. Furthermore, it will be very important for professionals to foster interpersonal justice in their interventions with young people, taking into account the opinions of all of the people involved and, especially, those of the young people who are the

object of the pedagogical action, treating them with dignity and respect. This is especially important because young people as a group are very keen to be treated like adults and for their views to be taken into consideration (Peterson-Badali, Care, & Broeking, 2007; Rap, 2013; Woolard, Harvell, & Graham, 2008). In addition, as a group they are wary of everything that comes from the adult world, which they mistrust.

Therefore, the only practical option for mutual understanding is to enable channels for effective participation and communication between young people and professionals. This will only be possible if they have been properly trained to this end. All of the supranational and national legislation concerning childhood emphasises the need for all professionals, especially legal practitioners, to have specialist training in the field of children. And not just regarding knowledge of the regulatory framework established for young offenders, but also the ability to understand the peculiarities of children, their developmental stage, their cognitive level, their psychosocial maturity, and in particular, to use tools to communicate effectively with young people that allow them to interpret what they are feeling and expressing while being attentive to whatever they transmit through verbal and non-verbal language.

#### 4.2. Young people's perceptions of the system and its legitimacy

Ultimately, and in line with what is stated above, the juvenile justice system cannot act without taking into consideration the people who are the object of its

intervention as it would lose a major part of its educational scope. This assumes that it is necessary to make an effort to understand their perspective and find out their opinion of their judicial experience. In this sense, research performed until now reminds us that there are still many areas to improve and which require serious consideration. In fact, it shows that perceptions of the equity of proceedings are not very high (Peterson-Badali, Care, & Broeking, 2007; Sprott & Greene, 2010), especially those relating to participation (Kilkelly, 2010; Rap, 2013). Research also shows that young people with the most experience of it have the worst opinions of the justice system (Woolard, Harvell, & Graham, 2008). In Spain, recent research has emphasised that young people are not entirely satisfied with the legal experience and it has been shown that satisfaction is directly related to perceptions of the equity of the proceedings, thus confirming that these perceptions are important for the children's views of it. Consequently, many of them particularly focus on the actions of the police and, despite regarding it as impartial and honest in its decision making, they are very critical of the personal treatment they receive, which they regard as lacking in respect (Pérez, Becerra, & Aguilar, 2018). In effect, although the police does not have a specific pedagogical function, it is the most visible aspect of the penal system and therefore the part with the most important role in forming an image of the system as a whole. Young people in Spain who have interacted with the police have a more negative perception than those who have not (Baz & Fernández-Molina, 2017).



Similarly, young people who have been subject to criminal proceedings regard being listened to as very important and they especially value having their opinion taken into account (Fernández-Molina, Bermejo, & Baz, 2018). Similarly, they have a very positive view of having what is happening and why explained to them throughout the procedure (Pérez, Becerra, & Aguilar, 2018). Therefore, it appears to be important for people who work in the juvenile justice system to foster the legal competence of the young people to improve their perceptions and satisfaction (Fernández-Molina, Bermejo, & Baz, 2018; Pérez, Becerra, & Aguilar, 2018). This is especially so because we should recall that their willingness to comply with measures they regard as correct and appropriate increases as their perception of the system improves.

## 5. Conclusions

This work has tried to examine in greater depth the idea that the pedagogical action of juvenile justice occurs not just at the final moment after the legal action has been imposed. For a responsibility oriented juvenile justice model which distances itself from the justice and welfare models, it is important that the punishment has medium-term aims, which will only be achieved when the measure is regarded as fair by the young person. To this end, the judge must select a measure in proportion to the offence committed, although to be educational, the measure must take into account the young person's psychosocial circumstances. Furthermore, the measure will be regarded as more fair when it is imposed through a procedure that encourages procedural

and interpersonal justice and implemented by professionals who act as examples of what is being demanded of the young person. The empirical research carried out has shown that children are attentive to how justice and its professionals operate and this is one of the elements they use to classify it as right or wrong. Only when the children understand that the justice system is fair will they accept the decisions taken by its operators as trustworthy. And only in this case will they be willing to understand that they have to fulfil them, thus increasing the educational impact of the measure.

It is not easy to educate in a hostile setting like juvenile justice and, as a minimum, it requires cooperation with the young people and their families. This cooperation is achieved, among other matters, by encouraging accessible justice which makes young people feel more comfortable during the procedure and makes them want to participate and by training professionals who know how to interact appropriately with the young people, who know how to listen to them, and who understand what they want to say. In this context, the feeling of justice and of being treated with dignity and respect can also be a powerful pedagogical tool.

## Notes

<sup>1</sup> Ortega (2004, p. 10) states that "It is not possible to educate without recognising the other (the student), without the will to accept. And neither is it possible to educate (illuminate something new) if the student does not see in the educator that she is recognised as somebody with whom there is a desire to establish an ethical relationship, and as somebody who is accepted for what she is in her entirety, not just for what she does or produces".

<sup>2</sup> As Bárcena and Melich note (2003, p. 207 and 210): “an education of the view from the victim is an education [...] which diverts the attention and the sense of the view from the space occupied by the self to the space occupied by the other [...]. It is educating from the experience of the person who endures and suffers the injustice.”

<sup>3</sup> It starts from the idea that “ethical responsibility towards others, even strangers, means that living is not a ‘private’ matter, but one which has inevitable repercussions while we continue to live in society. It means, in one word, that nobody can be indifferent to me” (Ortega 2004, p. 14).

<sup>4</sup> On 17 November 2010 the Committee of Ministers of the Council of Europe developed *Guidelines on child friendly justice*.

## References

Álvarez Fernández, M. V., Pintado Rey, V. R., & San Fabián Maroto, J. L. (2014). Elaboración de propuestas didácticas orientadas a mejorar los programas socioeducativos para jóvenes en situación de riesgo social. *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria*, 23, 151-173.

Bárcena, F., & Melich, J. C. (2003). La mirada ex-céntrica. Una educación desde la mirada de la víctima. In J. M. Mardones & R. Mate (Eds.), *La ética ante las víctimas* (pp. 195-218). Barcelona: Anthropos.

Baz, O., & Fernández-Molina, E. (2017). Process-based model in adolescence. Analyzing police legitimacy and juvenile delinquency within a legal socialization framework. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 24 (3), 237-252.

Bernuz Beneitez, M. J. (2015). El derecho a ser escuchado: el caso de la infancia en conflicto con la norma. *Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas*, 33, 67-98.

Bernuz Beneitez, M. J., & Dumortier, E. (2018). Why children obey the law: Rethinking juvenile justice and children’s rights in Europe through procedural justice. *Youth Justice*, 18 (1), 34-51.

Bernuz Beneitez, M. J., Fernández Molina, E., & Pérez Jiménez, F. (2009a). Educar y controlar: la intervención comunitaria en la justicia de menores. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 11 (12), 1-28.

Bernuz Beneitez, M. J., Fernández Molina, E., & Pérez Jiménez, F. (2009b). La libertad vigilada como medida individualizadora en la justicia de menores. *Revista Española de Investigación en Criminología*, 7, 1-27.

Birckhead, T. (2009). Toward a theory of procedural justice for juveniles. *Buffalo Law Review*, 57, 1447-1513.

Bottoms A., & Tankebe, J. (2012). Beyond procedural justice: A dialogic approach to legitimacy in criminal justice. *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 102 (1), 119-253.

Caride Gómez, J. A., & Varela Crespo, L. (2015). La pedagogía social en la vida cotidiana de los jóvenes: problemáticas específicas y alternativas de futuro en un mundo globalizado. *Perspectiva educacional. Formación de profesores*, 54 (2), 150-164.

Committee on the Rights of the Child (2007). *Observación General n° 10. Los derechos del niño en la justicia de menores*. Ginebra: Naciones Unidas.

Committee on the Rights of the Child (2009). *General comment no. 12. The right of the child to be heard*. Geneva: United Nations.

Committee on the Rights of the Child (2013). *General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration*. Geneva: United Nations.

Cordero Arce, M. (2015). Maturing children’s rights theory. From children, with children, of children. *International Journal of Children’s Rights*, 23 (2), 283-331.

Düinkel, F. (2014). Juvenile Justice Systems in Europe. Reform developments between justice, welfare and ‘new punitiveness’. *Kriminologijos studijos*, 1 (1), 31-76.

Fagan, J., & Tyler, T. (2005). Legal socialization of children and adolescents. *Social Justice Research*, 18 (3), 217-242.

Feld, B. (2006). Juveniles’ Competence to exercise Miranda Rights: An empirical study of police and practice. *Minnesota Law Review*, 91 (26), 26-100.

Fernández-Molina, E. (2008). *Entre la educación y el castigo. Un análisis de la justicia de menores*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Fernández-Molina, E. (2012). El internamiento de menores. Una mirada hacia la realidad de su práctica en España. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 14 (18), 1-20.

- Fernández-Molina, E. (2014). Repensando la justicia de menores. In F. Miró, J. R. Agustina, J. E. Medina, & L. Summers (Eds.), *Crimen, oportunidad y vida diaria. Libro homenaje al Profesor Dr. Marcus Felson* (pp. 613-647). Madrid: Dykinson.
- Fernández-Molina, E., Bermejo, M. R., & Baz, O. (2018). Percepciones de los jóvenes infractores sobre la justicia de menores. *Revista Española de Investigación Criminológica*, 16, 1-25.
- Fernández-Molina, E., & Bernuz, M. J. (2018). *Justicia de menores*. Madrid: Síntesis.
- Gargarella, R. (2012). Injusticia penal, justicia social. In R. Gargarella (Ed.), *El castigo penal en sociedades desiguales* (pp. 119-142). Buenos Aires: CIEPP.
- Gomá Lanzón, J. (2015). *Imitación y experiencia*. Madrid: Taurus.
- Grisso, T., & Schwartz, R. G. (2000). *Youth on Trial: A Developmental Perspective on Juvenile Justice*. Chicago: University of Chicago Press.
- Grisso, T., Steinberg, L., Woolard, J., Cauffman, E., Scott, E., Graham, S., & Schwartz, R. (2003). Juveniles' competence to stand trial: A comparison of adolescents' and adults' as trial defendants. *Law and Human Behaviour*, 27 (4), 333-366.
- Kilkelly, U. (2008). Youth courts and children's rights: the Irish experience. *Youth Justice*, 8 (1), 39-56.
- Kilkelly, U. (2010). *Listening to children about justice: Report of the Council of Europe consultation with children on child-friendly justice*. Strasbourg: Council of Europe.
- Krappmann, L. (2010). The weight of the child's view (article 12 of the Convention on the Rights of the Child). *International Journal of Children's Rights*, 18, 501-513.
- Larrauri, E. (2015). *Introducción a la criminología y al sistema penal*. Madrid: Trotta.
- Monahan, K., Steinberg, L., & Piquero, A. (2015). Juvenile Justice Policy and Practice: A developmental perspective. *Crime and Justice*, 44 (1), 577-619.
- Ortega Ruiz, P. (2004). La educación moral como pedagogía de la alteridad, **revista española de pedagogía**, 62 (227), 5-30.
- Ortega Ruiz, P., & Romero Sánchez, E. (2013). La experiencia de las víctimas en el discurso pedagógico. *Teoría Educativa*, 25 (1), 63-77.
- Pérez, F., Becerra, J., & Aguilar, A. (2018). Cómo perciben los menores infractores la justicia que se les aplica: un acercamiento desde la justicia procedimental. *Revista Española de Investigación Criminológica*, 16, 1-26.
- Peterson-Badali, M., Care, S., & Broeking, J. (2007). Young People's Perceptions and Experiences of the Lawyer-Client Relationship. *Canadian Journal of Criminology & Criminal Justice*, 49 (3), 375-402.
- Rap, S. (2013). *The participation of juvenile defendants in youth courts*. Utrecht: University Utrecht.
- Sprott, J. B., & Greene, C. (2010). Trust and confidence in the courts does the quality of treatment young offenders receive affect their views of the courts? *Crime & Delinquency*, 56 (2), 269-289.
- Steinberg, L. (2013). The influence of neuroscience on US Supreme Court decisions about adolescents' criminal culpability. *Nature Reviews Neuroscience*, 14 (7), 513-518.
- Steinberg, L., & Scott, E. S. (2003). Less guilty by reason of adolescence: developmental immaturity, diminished responsibility, and the juvenile death penalty. *American Psychologist*, 58 (12), 1009-1018.
- Tankebe, J. (2013). Viewing things differently: The dimensions of public perceptions of police legitimacy. *Criminology*, 51 (1), 103-135.
- Tyler, T. (2006). *Why people obey the law?* Chelsea: Yale University Press.
- Tyler, T., & Trinkner, R. (2017). *Why Children Follow Rules*. Oxford: Oxford University Press.
- Vandekerckhove, A., & O'Brien, K. (2013). Child-Friendly Justice: turning law into reality. *Europäische Rechtsakademie Academy*, 14, 523-541.
- Weijers, I. (2002). The Moral Dialogue: a Pedagogical Perspective on Juvenile Justice. In I. Weijers, & A. Duff (Eds.), *Punishing juveniles. Principle and critique* (pp. 135-154). Oxford: Hart Publishing.
- Woolard, J. L., Harvell, S., & Graham, S. (2008). Anticipatory injustice among adolescents: age and racial/ethnic differences in perceived unfairness of the justice system. *Behavioral Sciences & the Law*, 26 (2), 207-226.

## Authors' biographies

**María José Bernuz Beneitez** has a doctorate in law. She is an Associate Professor in Philosophy of Law and a Researcher in the Legal Sociology Laboratory at the Universidad de Zaragoza. Her research into juvenile justice started with her doctoral thesis and has continued with national and European projects on the topic (Youprev), as well as cooperation with criminology research groups in Albacete, Brussels (VUB), and Porto. Along with this line of research, she has also worked on security, gender-based violence, and animal rights policies.

 <https://orcid.org/0000-0001-7723-5172>

**Esther Fernández Molina** is an Associate Professor at the Universidad de Castilla-La Mancha. She is the Director of the Criminology Research Centre and is head of the Consolidated Research Group in Criminology and Juvenile Delinquency of the Universidad de Castilla-La Mancha. Her main lines of research are juvenile justice, crime trends in delinquency, and public perceptions of crime (fear of crime, attitudes to juvenile punishment, and attitudes towards penal institutions).

 <https://orcid.org/0000-0002-3103-0232>

# Table of Contents

## Sumario

### Educational and civic-penal responses to antisocial behavior

#### **Respuestas educativas y cívico-penales a los comportamientos antisociales**

Guest editor: Fernando Gil Cantero  
*Editor invitado: Fernando Gil Cantero*

#### **Fernando Gil Cantero**

Introduction: Educational and civic-penal responses to antisocial behavior

*Presentación: Respuestas educativas y cívico-penales a los comportamientos antisociales* 209

#### **David Reyero, Fernando Gil Cantero**

Education that limits is education that frees  
*La educación que limita es la que libera* 213

#### **María José Bernuz Beneitez, Esther Fernández Molina**

The pedagogy of juvenile justice: a child-friendly justice  
*La pedagogía de la justicia de menores: sobre una justicia adaptada a los menores* 229

#### **Marina Martins, Carolina Carvalho**

What do teenagers lie about?  
*¿En qué mienten los adolescentes?* 245

#### **Inmaculada Méndez, Cecilia Ruiz Esteban, Juan Pedro Martínez, Fuensanta Cerezo**

Cyberbullying according to sociodemographic and academic characteristics among university students  
*Ciberacoso según características sociodemográficas y académicas en estudiantes universitarios* 261

#### **Irene Montiel, José R. Agustina**

Educational challenges of emerging risks in cyberspace: foundations of an appropriate strategy for preventing online victimization  
*Retos educativos ante los riesgos emergentes en el ciberespacio: claves para una adecuada prevención de la cibervictimización en menores* 277

#### **Maialen Garmendia Larrañaga, Estefanía Jiménez Iglesias, Nekane Larrañaga Aizpuru**

Bullying and cyberbullying: victimisation, harassment, and harm. The need to intervene in the educational centre  
*Bullying y cyberbullying: victimización, acoso y daño. Necesidad de intervenir en el entorno escolar* 295



**Ana Rosser-Limiñana, Raquel Suriá-Martínez**

School adaptation and behavioural and emotional problems in minors exposed to gender violence  
*Adaptación escolar y problemas comportamentales y emocionales en menores expuestos a violencia de género* **313**

**Fanny T. Añaños-Bedriñana, Miguel Melendro**

**Estefanía, Rocío Raya Miranda**  
Young women with protective and judicial measures and their transit towards prison  
*Mujeres jóvenes con medidas de protección y judiciales y sus tránsitos hacia la prisión* **333**

**Book reviews**

---

**Esteban Bara, F. Ética del profesorado** [*Ethics of teaching staff*] (Juan García Gutiérrez). **García Amilburu, M., Bernal, A., & González Martín, M. R.** *Antropología de la educación. La especie educable* [*Anthropology of education. The educatable species*] (Yaiza Sánchez Pérez). **Rose, D., & Martin, J. R.** *Leer para aprender. Lectura y escritura en las áreas del currículo* [*Learning to write/reading to learn: Genre knowledge and pedagogy in the Sydney School: scaffolding democracy in Literacy Classrooms*] (Francisco Lorenzo Bergillos). **Buxarrais, M. R., & Vilafranca, I. (Coords.)**. *Una mirada femenina de la educación moral* [*A feminine view of moral education*] (Eric Ortega González). **351**

This is the English version of the research articles and book reviews published originally in the Spanish printed version of issue 273 of the **revista española de pedagogía**. The full Spanish version of this issue can also be found on the journal's website <http://revistadepedagogia.org>.



ISSN: 0034-9461 (Print), 2174-0909 (Online)

<https://revistadepedagogia.org/>

Depósito legal: M. 6.020 - 1958

INDUSTRIA GRÁFICA ANZOS, S.L. Fuenlabrada - Madrid

# La pedagogía de la justicia de menores: sobre una justicia adaptada a los menores\*

## *The pedagogy of juvenile justice: a child-friendly justice*

Dra. María José BERNUZ BENEITEZ. Profesora Titular. Universidad de Zaragoza ([mbernuz@unizar.es](mailto:mbernuz@unizar.es)).

Dra. Esther FERNÁNDEZ MOLINA. Profesora Titular. Universidad de Castilla-La Mancha ([esther.fdez@uclm.es](mailto:esther.fdez@uclm.es)).

### Resumen:

Este artículo ahonda en las oportunidades educativas que ofrece el propio proceso judicial, cuando un joven ha cometido una infracción penal. Siendo conscientes de que la respuesta se produce en un entorno poco amigable para la adolescencia, en este texto se señalan aquellos elementos que legitiman este sistema de justicia y hacen que los menores lo puedan percibir como justo y adecuado para responder a su comportamiento delictivo. Partiendo de que el paso por el procedimiento penal puede ser una experiencia de socialización legal para los menores y precisamente para que la acción pedagógica de la justicia surta efecto, se reivindica no solo la necesidad de un castigo esencialmente educativo y responsabilizador, sino también de unos profesionales debidamente formados que promuevan la participación del

joven en el procedimiento y mejoren su competencia legal. Solo así será posible que la experiencia judicial vivida por los menores infractores sea percibida positivamente y suponga una oportunidad de aprendizaje que mejore las actitudes de aquellos hacia la ley y el sistema. En definitiva, se propone una reflexión sobre la importancia de la acción pedagógica que la justicia de menores despliega a lo largo de todo el procedimiento y de cómo su éxito logra legitimar la intervención de un sistema penal especializado y favorecer que el menor entienda y acepte su sentido educativo.

**Descriptor:** justicia de menores, legitimidad, pedagogía, justicia accesible, participación, justicia adaptada al menor, percepciones de justicia.

\* Este trabajo se enmarca en el desarrollo de dos proyectos de investigación que han recibido financiación pública: «Ciudadanos y justicia penal. Un análisis de la opinión de los ciudadanos sobre el sistema penal» (DER2015-67184-R), financiado por el Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad del MINECO y «Justicia penal para todos. Un estudio del funcionamiento y la accesibilidad de la justicia penal» financiado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Fecha de recepción de la versión definitiva de este artículo: 06-02-2019.

Cómo citar este artículo: Bernuz Beneitez, M. J. y Fernández Molina, E. (2019). La pedagogía de la justicia de menores: sobre una justicia adaptada a los menores | *The pedagogy of juvenile justice: a child-friendly justice*. *Revista Española de Pedagogía*, 77 (273), 229-244. doi: <https://doi.org/10.22550/REP77-2-2019-02>

<https://revistadepedagogia.org/>

ISSN: 0034-9461 (Impreso), 2174-0909 (Online)

## Abstract:

This article considers the educational opportunities offered by juvenile justice interventions when a young person has committed a criminal offence. Given that the response occurs in an environment that is not child-friendly, this text identifies the elements that legitimise this justice system and make children perceive it as a fair and appropriate response to their criminal behaviour. The need for punishment which is educational and responsibility-oriented is noted, as is the need for appropriately trained professionals to promote young people's participation in the procedure and improve their legal competence, based on the fact that passing through the criminal procedure can be an experience of legal socia-

lisation for young people and in order that the pedagogical action of justice is effective. Only in this way will juvenile offenders have a positive perception of the judicial experience, which offers an opportunity to improve their attitudes towards the law and the system. In short, this article comprises a reflection on the importance of the pedagogical action that juvenile justice deploys throughout the whole procedure and how its success can legitimise the intervention by a specialized criminal system and encourage young people to understand and accept its educational sense.

**Keywords:** juvenile justice, legitimacy, pedagogy, access to justice, participation, child friendly justice.

---

*«Predicar con el ejemplo significa que el ejemplo predica»*

(Gomá, 2015, p. 574)

## 1. Pedagogía en la justicia de menores o el proceso judicial como pedagogía

La actual justicia de menores española se constituye como una jurisdicción especializada que interviene con menores y jóvenes que han cometido alguno de los delitos tipificados en el Código Penal mientras tenían entre catorce y dieciocho años. Se entiende que su especialización deriva del tipo de población con que trabaja, que se encuentra en un proceso de madurez y de integración social y, por tanto, tiene unas necesidades especiales. Desde otro ángulo, es preciso considerar que se trabaja con un grupo que tiene una mayor capacidad de aprendizaje y de cambio. Algo que hace que la justicia de menores aborde la inter-

vención con el joven como una oportunidad de enseñanza que aliente en mayor o menor grado su evolución hacia una vida adulta prosocial, que evite la reincidencia y la consolidación de una carrera delictiva o, de manera más humilde, que fomente la responsabilización por los hechos cometidos y el daño causado, encauzando así el proceso de integración social. En definitiva, se trata de una oportunidad educativa que, para cumplir su función, deberá tener en cuenta la situación del menor, y para ser percibida como justa deberá ser proporcionada a la gravedad y circunstancias del delito. Aseguran Ortega y Romero (2013, p. 76) que los procesos educativos son «un largo aprendizaje [...] para vivir éticamente, es decir, en la responsabilidad».

Una de las cuestiones centrales de la justicia de menores es cómo lograr esos objetivos responsabilizadores y hacer que el menor de edad aproveche esa oportu-

nidad educativa. Una buena parte de la literatura tanto criminológica como pedagógica se ha centrado en el contenido educativo de las medidas judiciales que se imponen, eventualmente, al final del proceso judicial. Cuando hablamos de las medidas judiciales, sean estas de internamiento o de medio abierto, una cuestión importante a determinar es qué enseñar, sobre qué elementos intervenir, dónde centrar la atención y, sobre todo, cómo hacerlo. Los expertos han destacado que es fundamental fomentar la responsabilización del menor por el delito cometido, que aquel reconozca las consecuencias y efectos que sus acciones han tenido en los otros y, en la medida de lo posible, repare el daño causado y/o responda mediante la medida judicial que el juez considere oportuna (Dünkel, 2014). De la misma manera se ha evidenciado que es preferible reducir el internamiento (especialmente en régimen cerrado) a su mínima esencia, para los casos más graves y siempre por el menor tiempo posible, precisamente por su limitado carácter educativo (Fernández-Molina, 2012) y por lo paradójico que supone educar para vivir en sociedad, pero al margen de ella. En consecuencia, la justicia de menores ha ido consolidando un abanico de respuestas que apuestan por la intervención educativa con el menor en su medio de referencia (su familia, su escuela, sus amigos...) y que el juez escoge teniendo en cuenta su situación psicosocial y la naturaleza del delito cometido (Fernández-Molina y Bernuz, 2018). Y es que, como destacan Ortega y Romero (2013, p. 75), para que la educación sea efectiva debe tener en cuenta las circunstancias del educando. Aseguran que «no se pue-

de educar si no se conoce la situación y el contexto en que vive el educando, ni hacer abstracción de las características singulares de este, pretendiendo hacer una educación de validez universal».

De igual manera, es evidente que la acción educativa que pretende la justicia de menores depende en gran medida de la labor que realizan los profesionales que intervienen con los menores durante la ejecución de estas medidas judiciales. A estos corresponde dotar de contenido educativo el castigo impuesto por el juez y hacer el seguimiento de la evolución del menor en el cumplimiento de la medida. Y ello, teniendo en cuenta que las condiciones para la intervención educativa en la justicia de menores no siempre son las más idóneas. De entrada, se trata de una población cautiva, que no ha elegido estar ahí, que puede tener un historial más o menos importante de fracaso escolar y problemas de comportamiento y que no tiene opción entre cumplir o no con las medidas que se imponen judicialmente. Y, como en cualquier otro entorno que pretenda ser educativo y lograr efectos a medio y largo plazo, el profesional necesita contar con una cierta connivencia con el menor<sup>1</sup>. Y, si no connivencia, al menos son precisas una actitud favorable, una cierta motivación y una predisposición para aprender o para cambiar, y unas condiciones sociales que lo apoyen en ese cambio.

Esto se conseguirá, en parte, con una propuesta de actividades que los menores de edad sean capaces de realizar, que les resulte mínimamente gratificante y, sobre todo, que sea significativa para ellos

(Álvarez, Pintado y San Fabián 2014, p. 170). En esa línea, asegura Weijers (2002, p. 145) que la medida solo producirá su efecto educativo cuando el agresor la entiende justificada. Y ello se producirá, también en parte, como conclusión del *diálogo* que se ha producido en las diversas instancias judiciales y en el que el menor debe participar activamente. De alguna manera, la pedagogía del castigo juvenil también puede ser entendida como una metodología de aprendizaje que está atenta al proceso de enseñar y a las diferentes formas, momentos y profesionales que pueden hacerlo. En esa forma más amplia de entender la tarea educativa, todos y cada uno de los agentes que intervienen con el menor a lo largo del proceso judicial tienen una gran responsabilidad. Como diría Ortega (2004), toda relación profesional con el menor debe convertirse en una *situación educativa*.

Yendo un paso más allá, se ha insistido en destacar que el paso por el proceso de justicia juvenil puede suponer una experiencia (positiva o negativa) de socialización legal (Fagan y Tyler, 2005), en donde el menor va a ir adquiriendo un conocimiento y forjando unas actitudes hacia el sistema legal y judicial (Tyler y Trinkner, 2017). En efecto, el menor entra en contacto con una diversidad de profesionales (policiales, judiciales y sociales) cuando es sometido a un proceso penal. Cada interacción supone una oportunidad de aprendizaje y el rol educativo que adquiere cada profesional les obliga a ser conscientes de la incidencia de su actuación en las percepciones y actitudes que el adolescente desarrolle respecto al sistema en su conjunto.

Se trata de una perspectiva que tiene que ver con la consideración del profesional y de su actuación como ejemplos educativos. Como asegura Gomá (2015, pp. 570-571, 573),

si su comportamiento revela una virtud superior a la mía, el ejemplo me acusa y denuncia mi culpabilidad; si su mérito es inferior al mío, su ejemplo me excusa y me absuelve [...]. Quien es ejemplo de lo que predica tiene *auctoritas*.

Si se pretende que los objetivos educativos y responsabilizadores de las medidas judiciales lleguen más allá de la coerción que se aplica para su cumplimiento, se requiere, entre otras cuestiones, que los menores vean a los profesionales como autoridades legítimas en general y, en particular, como legitimadas para educar y para enseñar. Y, en definitiva, que perciban el sistema de justicia de menores como justo.

En este trabajo se va a reflexionar sobre las diferentes posibilidades educativas que ofrece la intervención que se realiza a través de la justicia juvenil. Nos detendremos brevemente en la importancia que adquiere la finalidad del castigo y en los requisitos esenciales que debe garantizar el sistema para que este resulte educativo. Nos centraremos en delimitar los aspectos más relevantes que promueven la acción pedagógica de la justicia de menores, especialmente, el que todos los profesionales del sistema garanticen la participación activa del menor en el proceso para que su opinión sea tenida en cuenta en la decisión final y para que comprenda el sentido de la medida finalmente impuesta. De igual



modo, nos detendremos en destacar la importancia que tienen las consecuencias de un trato profesional y especializado por parte de los actores del sistema que queda patente cuando se analizan las percepciones de los jóvenes sobre su paso por el sistema.

## 2. La finalidad educativa del castigo en la justicia juvenil

La justicia de menores ha conocido en su historia una diversidad de maneras de definir la infancia, entender sus delitos y responder a ellos. Es evidente que son cuestiones que van enlazadas y solo se entiende la respuesta a la delincuencia juvenil y el sentido del castigo cuando se ponen en relación con la forma de comprender la infancia y la adolescencia. Desde esa perspectiva, los autores identifican cuatro grandes modelos (más o menos puros) en la justicia de menores: el modelo tutelar, el retributivo, el reparador y el responsabilizador (entre otros, Fernández-Molina, 2008).

El modelo tutelar surge con la justicia de menores a inicios del siglo xx, con una pretensión de ofrecer una respuesta especial a una población diferente. Entiende que la infancia, por encontrarse en una fase de formación, tiene una serie de carencias físicas, psicológicas, emocionales o sociales que están en el origen de su comportamiento delictivo y, en consecuencia, la intervención desde la justicia juvenil debe orientarse a incidir en esos factores para evitar una posible reincidencia. En este modelo, dado que el niño es entendido como un sujeto pasivo, se

toman decisiones sin necesidad de contar con él o de valorar su opinión y sin buscar su connivencia en el proceso educativo, que tiende a ser autoritario *por el bien del menor*.

Las carencias y excesos punitivos que generó el celo de intervenir en las circunstancias psicosociales del menor, hicieron que se planteara la necesidad de atender principalmente al delito cometido a la hora de diseñar la respuesta al mismo (Gargarella, 2012). Se trata de un planteamiento que no ha sido prevalente en la justicia de menores ni previsto para la mayoría de la población que llega ante ella. Sin embargo, es una perspectiva retributiva que se evidencia más claramente cuando se reivindica un castigo más severo para los jóvenes que cometen los delitos de mayor gravedad. En esas ocasiones, parece razonarse en términos simplistas identificando la posibilidad y la capacidad para delinquir con la competencia para comprender el delito y el daño causado. Y, si se asume que el menor comprende lo que ha hecho, también se exige que se le imponga una medida más acorde con las circunstancias y gravedad del delito y menos atenta a sus circunstancias personales y psicosociales. Esta perspectiva obvia, sin embargo, el hecho de que el menor de edad se encuentra en un proceso formativo en todos los ámbitos, que justifica una intervención específica desde instituciones especializadas hasta que cumpla la mayoría de edad. La gravedad del delito cometido no es indicativo de una mayor madurez sino, posiblemente, de todo lo contrario, de una mayor vulnerabilidad (Fernández-Molina y Bernuz, 2018).

El modelo reparador se construye sobre premisas distintas. Entiende que el delito abre un conflicto entre el agresor(es) y la víctima(s) y sus familias. Considera que la mejor respuesta a ese conflicto es lograr que el agresor se responsabilice por el daño causado y repare de forma significativa a la víctima. Asume que la mejor manera de lograr esos objetivos es integrando a agresor y víctima en un proceso de diálogo para que, con ayuda de un facilitador, hablen sobre el daño causado y discutan sobre la mejor forma de repararlo. Se trata de un modelo que apuesta claramente por la participación activa del menor que ha delinquido en el proceso de responsabilización y de reparación del daño a través de una conciliación, reparación o la realización de servicios en beneficio de la comunidad (Bernuz, 2015). De alguna manera se trata de hacer pedagogía y de «enseñar en y desde el otro» (Ortega y Romero, 2013, p. 67), pero dando satisfacción también a los intereses de las víctimas. Todos los puntos de vista cuentan a la hora de plantear una solución al daño causado con el delito. Se entiende que las víctimas, a través de estos procesos, recuperan protagonismo en la resolución del conflicto, al tiempo que ayudan al menor a comprender el daño causado mediante la narración personal del mismo<sup>2</sup>. Es una forma de intervención que insiste en señalar las consecuencias de nuestras acciones en los demás<sup>3</sup>. Se trata de una perspectiva que ayuda al menor que ha agredido a salir de su propia exculpación para comprender las razones del otro que ha sufrido las consecuencias de sus hechos.

Sin embargo, los países occidentales, y entre ellos España, han apostado en la ac-

tualidad por el modelo de responsabilidad para orientar el castigo juvenil. Este modelo, que se enmarca en los postulados de la Convención de los Derechos de la Infancia, entiende que el niño es un sujeto de derecho a quien corresponden derechos de protección, promoción y también de participación. En concreto, la ley española entiende que el menor que ha cometido un delito entre los catorce y los dieciocho años es responsable desde un punto de vista penal, pero también comprende que por encontrarse en un proceso de formación las medidas deben tener una naturaleza sancionadora y educativa. Además, para conseguir que ese objetivo educativo de las medidas se proyecte a más largo plazo, aspira a que sean consideradas como justas por los menores haciendo que sean proporcionadas a la gravedad del delito cometido. Igualmente pretende que las medidas sean más eficaces adaptándolas a las circunstancias psicosociales del menor. En todo caso, también asume que la participación del menor en el proceso es importante desde un punto de vista formal y material. Desde un punto de vista formal porque entiende que para que el proceso sea justo debe contarse con la participación del menor. Desde un punto de vista material porque su participación en el procedimiento favorecerá una mejor comprensión de la medida y un cumplimiento más espontáneo de la misma. Se verá más detenidamente en el siguiente punto.

### 3. La pedagogía de una justicia comprensible y participativa

Partimos de la premisa de que, para que la justicia de menores cumpla su función pedagógica, en todo contacto con el

menor deben cumplirse dos requisitos vinculados entre sí. De un lado, el sistema y sus procedimientos deben ser comprensibles para los adolescentes, sobre todo teniendo en cuenta que entender el funcionamiento y sentido de las instituciones penales requiere un nivel de abstracción que, en muchas ocasiones, excede las capacidades de sus destinatarios. De otro lado, el sistema de justicia de menores debe permitir la participación de los jóvenes a lo largo del procedimiento dándoles la posibilidad de opinar sobre las decisiones que los adultos van a tomar y que les afectan directamente, así como de involucrarse en toda la acción educativa. Es evidente que el menor solo podrá participar efectivamente en una justicia de menores que le resulte accesible.

### 3.1. La necesaria accesibilidad de la justicia de menores

Uno de los principales problemas que plantea la aceptación y colaboración ciudadana con las instituciones penales en general y, especialmente con los tribunales, es la distancia que media entre quienes imparten justicia y quienes la acatan. Por ello, cada vez se habla más de la necesidad de mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia. Esta inaccesibilidad es mayor, si cabe, cuando los destinatarios de la actuación judicial son los niños y jóvenes. Los símbolos de la administración de justicia, un proceso opaco en sus pretensiones, el lenguaje técnico y la inercia de un sistema, diseñado hace siglos y que no se ha adaptado del todo a los usos y costumbres de la sociedad del siglo XXI, hacen del sistema penal un espacio hostil para quien interactúa con él. Así, se ha destacado que la

puesta en escena de la maquinaria judicial contribuye a generar esa imagen de la justicia como algo alejado. Espacios amplios, fríos, sus personajes y togas negras que lo unifican todo, dificultan comprender quién es quién y qué espera cada uno del menor procesado. Junto a esto, el lenguaje judicial lo complica todo y se erige en la principal barrera de acceso, especialmente para los jóvenes que ya de por sí tienen grandes dificultades para comunicarse de manera efectiva con el mundo adulto (Fernández-Molina, 2014, p. 625). Por ello, y especialmente en la última década, se ha insistido en la necesidad de promover una justicia adaptada a la infancia y la adolescencia (*child friendly justice*) en la línea propuesta por el Consejo de Europa<sup>4</sup>. En otras palabras, se trata de crear una justicia cercana, participativa y comprensible para los menores.

Tras esta iniciativa late, no solo el convencimiento de que hay que adaptar la justicia penal a los nuevos tiempos, sino también la constatación de que los jóvenes, a pesar de la madurez cognitiva que tienen ya en el período de la adolescencia, parten con algunas dificultades para ser competentes legalmente, porque todavía hay algunos aspectos que deben perfeccionarse y consolidarse hasta convertirse en adultos de pleno derecho. La literatura científica, procedente del ámbito de la psicología y la neurociencia, ha demostrado que existe toda una dimensión psicosocial que tiene que ver con aspectos emocionales y de autocontrol del comportamiento que todavía durante este período de la vida están en pleno proceso de desarrollo (Steinberg, 2013).

Esa inmadurez tiene dos consecuencias para nuestro colectivo diana. Por un lado, los hace más propensos a acabar involucrados en comportamientos delictivos. El hecho de que algunas partes del cerebro no estén lo suficientemente desarrolladas provoca una verdadera incapacidad para controlar sus impulsos. Si a ello se le une que los jóvenes tienden a pensar esencialmente a corto plazo, tienen una gran sensación de invulnerabilidad y una mayor predilección por experimentar nuevas sensaciones, los convierte en candidatos perfectos para realizar comportamientos de riesgo (Steinberg y Scott, 2003) que, como afirma Larrauri (2015), en ocasiones están tipificados como delitos. Por otro lado, esta inmadurez provoca una mayor incompetencia para comportarse debidamente durante el procedimiento judicial. Entender la naturaleza y el alcance del sistema penal, la función de sus actores, el sentido de sus procedimientos o comprender los derechos que les asisten, requiere tener cierta capacidad de abstracción y competencia en la toma de decisiones (Monahan, Steinberg y Piquero, 2015). Así, por ejemplo, un menor procesado debe decidir si hace uso o no de su derecho a declarar ante la policía; en su caso, debe decidir hasta dónde cuenta en su declaración o lo que comparte en la sala de justicia. De la misma forma, debe decidir si se conforma o no con la medida que le propone el fiscal (Grisso et al., 2003). Y aunque puede parecer que, en general, los menores pueden entender todo lo que ello supone, la investigación científica ha puesto de manifiesto que son más incompetentes para ejercer sus derechos y que su pensamiento es menos estratégico que el de los adultos ya que valoran,

comparan y sopesan peor las distintas alternativas (Grisso y Schwartz, 2000) y las consecuencias de sus actos.

Por esa incapacidad, el sistema debe hacer un esfuerzo añadido para permitir que los menores procesados puedan comprender el alcance de la actuación que pretende realizarse con ellos y participar efectivamente en el proceso. Participación que es importante desde dos puntos de vista. De un lado, para que el juicio sea considerado justo, el menor debe ser capaz de participar en el proceso y en la toma de decisiones. Esto es, si los adultos no pueden adoptar las decisiones al margen de sus protagonistas, será preciso insistir en la promoción de una justicia que genere el clima de confianza suficiente para que los jóvenes se expresen con libertad y aporten su propio punto de vista sobre lo acaecido. Y no puede promoverse la participación si previamente no ha habido una mínima información de cuáles son las reglas del juego. Por ello, los adultos deberán explicar a los menores previamente qué está pasando, qué va a ocurrir y qué se espera de ellos. De otro lado, solo si el menor participa comprenderá el sentido de las decisiones y medidas que se van a tomar y, solo cuando esto ocurra, la medida tendrá un alcance más educativo y responsabilizador que si se impone en un contexto incomprensible para él.

### 3.2. La participación de los jóvenes en la justicia de menores

Como avanzábamos, una de las ideas más innovadoras de la Convención de los Derechos de los Niños (1989) fue la de rechazar la idea del niño como objeto a cui-

dar y proteger, para entender que también debe ser considerado como un sujeto de derecho al que se le deben reconocer derechos de protección y promoción, pero también de participación. De hecho, Krappmann (2010, p. 502) ha asegurado que:

La noción de participación captura la esencia de la Convención. La Convención destaca que el niño es un ser humano que tiene derecho a ser respetado como un individuo único con su propia perspectiva e intenciones personales por el resto de seres humanos, por el Estado, sus instituciones y otras organizaciones<sup>5</sup>.

En el ámbito de la justicia de menores, el Comité de los Derechos del Niño ha asumido que la misma consideración de que el menor es responsable penalmente supone reconocer «que es competente para participar efectivamente en las decisiones que se tomen por infracciones de la legislación penal» (Kilkelly, 2008, p. 41)<sup>6</sup>.

La Convención ha conseguido que, al menos, las decisiones no se tomen de manera paternalista, por el bien del menor, sino teniendo en cuenta su *interés superior*, que exige conocer su opinión sobre el asunto (Comité de los Derechos del Niño, 2013). Aquí, una de las dificultades principales radica en saber integrar adecuadamente las opiniones y deseos del joven en una decisión que el juez debe tomar atendiendo a su interés superior. En todo caso, como mínimo, para que el menor se sienta partícipe, tiene que ser capaz de explicarle la distancia entre sus deseos y los criterios que están detrás de la decisión finalmente impuesta. Se ha destacado muy acertadamente que, a la postre, van a ser los

adultos quienes decidan cuándo pueden participar los menores y de qué manera (Bernuz y Dumortier, 2018). Por ello, Cordero (2015, p. 292) avanza que será preciso estar vigilantes para evitar una participación excesivamente protegida.

Sin embargo, y a pesar de la dificultad, la participación de los jóvenes en el procedimiento es posible y para ello es necesario tener en cuenta algunas consideraciones sobre las que han alertado las instancias supranacionales. Así, el Comité de los Derechos del Niño en la Observación general 12 (2009) señaló que la participación de los protagonistas de un proceso implica que debe existir un diálogo basado en el respeto mutuo en el que cada uno pueda expresar su visión de lo sucedido y que lo expresado en ese diálogo va a determinar el resultado final que se adopte. Además, insistió también en que para que esto ocurra, las interacciones deben producirse en un contexto que sea capaz de inspirar confianza y es muy importante que los menores perciban que los adultos están dispuestos a escuchar y a tomar en serio su visión de los hechos. Para eso, posiblemente será necesario que los actores legales modifiquen su proceder habitual. Así, en su comportamiento deberán omitir algunas formalidades (lenguaje, togas, etc.), hablar con el menor en un ambiente informal y lo suficientemente íntimo (al margen de otros profesionales que trabajan en la oficina judicial) como para hacer que el menor se sienta cómodo y pueda expresarse libremente y sin presiones y deberán permitir que el menor esté acompañado por sus padres o que comparezca solo, si lo prefiere así. Ahora bien, como han recordado las recomenda-



ciones sobre *child friendly justice*, habrá que explicar al menor (preferiblemente su abogado) que el hecho de que el juez lo escuche, no significa que su versión de los hechos sea la que va a prevalecer. De igual modo, cuando se adopte la decisión final, el juez deberá explicar al menor cómo se tuvieron en consideración sus opiniones y cuáles son las razones que le han llevado a imponer determinada medida.

Finalmente, como ya se apuntaba más arriba, para que el menor pueda participar efectivamente en el proceso, además de las adaptaciones ya advertidas, se hace imprescindible que el menor comprenda bien el procedimiento y conozca cuál es el alcance de las actuaciones que se van a realizar. De esta forma, el derecho a la información de los menores se convierte en un aspecto crucial que el sistema de justicia juvenil debe garantizar. De hecho, cuando el menor no ha sido informado adecuadamente, su sentimiento de injusticia aumenta porque se ve obligado a participar en un procedimiento o en una decisión cuyo alcance no comprende. Ese sentimiento de injusticia se extiende a toda la institución, a las decisiones que se adopten y a las medidas que se impongan. Sobre esto ya insistían las recomendaciones del Consejo de Europa y también lo ha hecho la Directiva 800/2016 *relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales* que deberá transponerse a nuestro ordenamiento jurídico antes de que finalice 2019.

Dos son los aspectos cruciales para que la información se produzca de forma efectiva y para que se promueva la acción

pedagógica de la justicia de menores. De un lado, la información debe adaptarse al nivel madurativo y cultural de los adolescentes, y para ello será necesario que los actores legales sean capaces de hacer las adaptaciones de registro necesarias y que tengan a su disposición materiales que faciliten la comprensión de los menores (Vandekerckhove y O'Brien, 2013). De otro lado, la información debe ser lo suficientemente detallada y explícita para que el menor pueda situarse en el proceso y sea capaz de prever lo que va a suceder y lo que se espera de él. Así, hay que explicar en cada fase del procedimiento cuánto va a durar, qué va a pasar, quién va a intervenir y cuál es su papel. Los menores, para entender y decidir en el procedimiento de la mejor manera, necesitan saber qué es lo que está pasando, qué va a pasar en el futuro y cuáles son las distintas alternativas que se le presentan y las consecuencias que derivan de cada una de ellas.

Es importante recordar que entre las razones para fomentar la participación del menor en la justicia de menores está su posible impacto (directo o indirecto) en la prevención de la reincidencia. Es cierto que la principal apuesta de la justicia de menores para prevenir la reincidencia pasa por la responsabilización por los delitos cometidos. Las vías para lograrlo van desde el diseño de medidas que tengan un contenido que ahonde en las razones y/o causas del delito y que le permitan comprender lo que ha hecho y las consecuencias que ha tenido su acción, pero también tienen que ver con la participación del menor a lo largo del proceso que le permitirá «mejorar la imagen que tienen de sí mis-

mos, ampliando sus recursos personales, afectivos y relacionales, fortaleciendo su autoestima y la capacidad que tienen para decidir en los asuntos públicos» (Caride y Varela, 2015, p. 156).

Además, ya apuntábamos que para que las medidas judiciales sean efectivamente educativas y responsabilizadoras y logren sus objetivos a medio y largo plazo, necesitan una cierta colaboración por parte del menor. Más concretamente, es preciso contar con una participación del menor en el proceso que le permita comprender mejor por qué se ha llegado hasta ahí y por qué se aplica una determinada medida judicial. Ya decíamos anteriormente que:

Si el menor participa en la toma de decisiones, se le hace partícipe de la misma, se le escucha, se le informa y se le explica la decisión, comprenderá mejor las razones subyacentes, colaborará más con unas instituciones que percibe como más justas y posiblemente el cumplimiento de la medida tenga mejores resultados y a más largo plazo que una medida impuesta [...]. Solo se logrará este objetivo a medio y largo plazo si el joven se ha sentido partícipe de las decisiones que se van tomando en los procesos ante la justicia de menores (Fernández-Molina y Bernuz, 2018, p. 191).

#### 4. Los protagonistas del sistema

Finalmente, para que la acción pedagógica del sistema sea exitosa y para verificar que efectivamente logra todos los efectos deseados es importante hacer referencia a las actuaciones de los agentes que intervienen en el sistema y a las percepciones de los menores infractores. En las últimas décadas, la literatura científica ha llamado la

atención sobre la importancia que tiene la percepción de justicia de los procedimientos para todos aquellos que interactúan con las autoridades legales. En gran parte porque esas percepciones van a condicionar las actitudes de los ciudadanos hacia el sistema y las leyes penales. Esto es especialmente importante cuando hablamos de menores porque, de esta manera, el paso por el procedimiento judicial se puede convertir en una experiencia de socialización legal (Fagan y Tyler, 2005) que permite al menor formarse una imagen sobre la legislación y el sistema penal y sobre si una y otro pueden considerarse o no como legítimos. De tal forma que los profesionales tienen que hacer de la experiencia judicial, no solo una oportunidad de aprendizaje, sino un ejercicio de reafirmación de la legitimidad de la institución penal (Tyler y Trinkner, 2017). Es evidente que se cumplirán más espontáneamente las decisiones judiciales que se imponen por instituciones que consideramos legítimas.

##### 4.1. La actuación de los profesionales: la apuesta por la equidad y la especialización

De acuerdo con lo anterior, cada agente cumple un papel determinante en la función educativa de la justicia de menores. Así, habría que empezar señalando cuáles son los elementos que la literatura científica ha identificado como aptos para garantizar una actuación legítima para quienes interactúan con el sistema penal (Tyler, 2006; Bottoms y Tankebe, 2012). En concreto, se indica que son dos los aspectos a tener en cuenta: la calidad en la toma de decisiones y la calidad de trato (Tankebe, 2013).

En primer lugar, los agentes deben garantizar que las decisiones que se adopten a lo largo del procedimiento sean equitativas, esto es, los menores deben percibir que las autoridades legales a la hora de apostar por una solución u optar por una respuesta concreta han sido imparciales y honestos, que sus prejuicios o consideraciones particulares no han prevalecido en la decisión final. Esto puede ser especialmente complicado en una jurisdicción, como la de menores, que es por definición individualizada y que tiene en cuenta no solo la naturaleza de los hechos cometidos sino también las circunstancias psicosociales del menor infractor. Algo que hace posible que el mismo delito sea castigado de forma muy diferente según las circunstancias del caso. De ahí que sea importante saber comunicar al menor las razones que hay detrás de esta decisión para que la comprenda. Además, será muy importante que los profesionales fomenten la justicia interpersonal en su intervención con los menores teniendo en cuenta las opiniones de todos sus protagonistas y, especialmente, la de los jóvenes objeto de la acción pedagógica, tratándolos con dignidad y respeto. Esto es especialmente importante porque los jóvenes son un colectivo muy atento a que se le trate como adultos y muy exigente para que su opinión sea tenida en consideración (Peterson-Badali, Care y Broeking, 2007; Rap, 2013; Woolard, Harvell y Graham, 2008). Además de ser un colectivo que se muestra receloso de todo aquello que provenga del mundo adulto del que desconfían.

Por ello, la única vía que cabe para el entendimiento mutuo es posibilitar canales de participación y comunicación efec-

tiva entre los menores y los profesionales. Y ello, solo será posible si estos han sido debidamente entrenados para tal fin. Toda la legislación supranacional y nacional en materia de infancia ha insistido en la necesidad de que todos los profesionales, especialmente los operadores jurídicos, cuenten con una especialización en el ámbito de menores. Y no solo relacionada con un conocimiento del marco normativo previsto para la infancia infractora, sino también con la capacidad para comprender las especificidades de los menores, el momento evolutivo en el que se encuentran, su nivel cognitivo, su madurez psicosocial y, muy especialmente, para manejar herramientas de comunicación efectiva con menores que les permita interpretar lo que sienten y expresan, estando atentos a todo lo que estos transmiten a través del lenguaje verbal, pero también del no verbal.

#### 4.2. Percepciones de los jóvenes sobre el sistema y su legitimidad

En definitiva, y de acuerdo con lo que se ha expuesto hasta el momento, el sistema de justicia de menores no puede actuar sin tener en consideración a las personas objeto de su intervención porque perdería una parte importante de su alcance educativo. Ello supone que hay que hacer un esfuerzo por comprender su perspectiva y conocer cuál es su opinión sobre su paso por el procedimiento y cómo han experimentado toda la acción educativa que se ha desarrollado. En este sentido, las investigaciones que se han realizado hasta el momento nos recuerdan que todavía quedan muchos aspectos a mejorar y a tomar seriamente en consideración. De hecho, muestran que las percepciones de equidad de los proce-

sos no son muy altas (Peterson-Badali, Care y Broeking, 2007; Sprott y Greene, 2010), especialmente las relacionadas con la participación (Kilkelly, 2010; Rap, 2013). También indica la investigación que aquellos jóvenes con más experiencia tienen peores valoraciones sobre la justicia (Woolard, Harvell y Graham, 2008). En nuestro país investigaciones recientes han puesto de manifiesto que los jóvenes no están del todo satisfechos con la experiencia judicial y se ha demostrado que la satisfacción está directamente relacionada con las percepciones de equidad de los procedimientos, confirmando así que esas percepciones sí son importantes para la valoración que realizan los menores. Así, muchos de ellos se fijan especialmente en la actuación de la policía y, a pesar de considerarla imparcial y honesta en su toma de decisiones, son muy críticos con el trato personal deparado, que consideran poco respetuoso (Pérez, Becerra y Aguilar, 2018). En efecto, aunque la policía no tenga una función pedagógica específica, sí que es cierto que es la cara más visible del sistema penal y por tanto la más empleada para formar una imagen sobre el sistema en su conjunto. Sin embargo, los jóvenes españoles que han interactuado con ella tienen una percepción más negativa que aquellos que no lo han hecho (Baz y Fernández-Molina, 2017).

Así mismo, aquellos jóvenes que se han visto sometidos a un procedimiento penal consideran muy importante el hecho de sentirse escuchados y valoran muy especialmente que su opinión haya sido tenida en cuenta (Fernández-Molina, Bermejo y Baz, 2018). De la misma manera, aprecian muy positivamente que se les explique qué

pasa a lo largo del procedimiento y por qué (Pérez, Becerra y Aguilar, 2018). Por ello, parece importante que aquellos que trabajan en el sistema de justicia de menores fomenten la competencia legal de los menores porque sus percepciones y su satisfacción mejoran (Fernández-Molina, Bermejo y Baz, 2018; Pérez, Becerra y Aguilar, 2018). Especialmente, porque se recuerda que cuando su percepción del sistema mejora, también lo hace la disponibilidad para cumplir más espontáneamente una medida que entienden como correcta y adecuada.

## 5. Conclusiones

En definitiva, este trabajo ha tratado de ahondar en la idea de que la acción pedagógica de la justicia de menores no solo se realiza en el último momento y una vez impuesta la medida judicial. A un modelo responsabilizador de justicia de menores que se aleja del retributivo y del tutelar le importa que el castigo tenga pretensiones a medio plazo, que solo se lograrán cuando la medida sea entendida como justa por el menor. Para ello el juez deberá adoptar una medida proporcional al delito cometido, aunque para ser educativa tendrá que tener en cuenta las circunstancias psicosociales del menor. Además, la medida será entendida como más justa cuando se ha impuesto a través de un procedimiento que fomente justicia procedimental e interpersonal y mediante profesionales que sirvan de ejemplo de cuanto exigen al menor. La investigación empírica realizada ha mostrado que los menores están atentos a cómo interviene la justicia y sus profesionales y es uno de los elementos que les sirve para calificarla de correcta o incorrecta. Solo cuando los me-

nores entienden que el sistema de justicia es justo asumirán que las decisiones que se toman por sus operadores son justas. Y solo en ese caso estarán dispuestos a entender que tienen que cumplirlas y el impacto educativo de la medida será mayor.

Educar en un entorno hostil como lo es la justicia de menores no es fácil y requiere al menos de connivencia con el menor y también con su familia. Se trata de una colaboración que se logrará, entre otras cuestiones, fomentando una justicia accesible que haga que el menor se sienta más cómodo durante el procedimiento y quiera participar, formando profesionales que sepan relacionarse con los menores adecuadamente, que sepan escucharlos y entender lo que quieren decir. En este contexto, quizás se podría afirmar que el sentimiento de justicia y de ser tratado con dignidad y con respeto también pueden ser una potente herramienta pedagógica.

## Notas

<sup>1</sup> Asegura Ortega (2004, p. 10) que «No es posible educar sin el reconocimiento del otro (el alumno), sin la voluntad de acogida. Y tampoco es posible educar (alumbrar algo nuevo) si el educando no percibe en el educador que es reconocido como alguien con quien se quiere establecer una relación ética, y como alguien que es acogido por lo que es y en todo lo que es, no solo por aquello que hace o produce».

<sup>2</sup> Como aseguran Bárcena y Melich (2003, pp. 207 y 210) «una educación de la mirada desde la víctima es una educación [...] que desvía la atención y el sentido de la mirada desde el espacio que ocupa el yo al espacio que ocupa el otro [...]. Es educar desde la experiencia de quien padece y sufre la injusticia».

<sup>3</sup> Se parte de la idea de que «responsabilidad ética para con los otros, aun con los desconocidos, significa que vivir no es un asunto *privado*, sino que tiene repercusiones inevitables mientras sigamos viviendo

en sociedad. Significa, en una palabra, que nadie me puede ser *indiferente*» (Ortega, 2004, p. 14).

<sup>4</sup> El 17 de noviembre de 2010 el Comité de Ministros del Consejo de Europa desarrolló unas recomendaciones sobre una justicia adaptada a los menores (*Guidelines on child friendly justice*).

<sup>5</sup> En el original: «The notion of participation captures an essential feature of the Convention. The Convention highlights that the child is a human being, who has the right to be respected as a unique individual with an own perspective and personal intentions by fellow human beings and also by the state, its institutions and other organizations».

<sup>6</sup> En el original: «that he/she is “competent and able to effectively participate in the decisions” made about infringements of the criminal law» (en el original).

## Referencias bibliográficas

- Álvarez Fernández, M. V., Pintado Rey, V. R. y San Fabián Maroto, J. L. (2014). Elaboración de propuestas didácticas orientadas a mejorar los programas socioeducativos para jóvenes en situación de riesgo social. *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria*, 23, 151-173.
- Bárcena, F. y Melich, J. C. (2003). La mirada ex-céntrica. Una educación desde la mirada de la víctima. En J. M. Mardones y R. Mate (Eds.), *La ética ante las víctimas* (pp. 195-218). Barcelona: Anthropos.
- Baz, O. y Fernández-Molina, E. (2017). Process-based model in adolescence. Analyzing police legitimacy and juvenile delinquency within a legal socialization framework. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 24 (3), 237-252.
- Bernuz Beneitez, M. J. y Dumortier, E. (2018). Why children obey the law: Rethinking juvenile justice and children's rights in Europe through procedural justice. *Youth Justice*, 18 (1), 34-51.
- Bernuz Beneitez, M. J., Fernández Molina, E. y Pérez Jiménez, F. (2009a). Educar y controlar: la intervención comunitaria en la justicia de menores. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 11 (12), 1-28.
- Bernuz Beneitez, M. J., Fernández Molina, E. y Pérez Jiménez, F. (2009b). La libertad vigilada como medida individualizadora en la justicia de menores. *Revista Española en Investigación Criminológica*, 7, 1-27.



- Bernuz Beneitez, M. J. (2015). El derecho a ser escuchado: el caso de la infancia en conflicto con la norma. *Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas*, 33, 67-98.
- Birckhead, T. (2009). Toward a theory of procedural justice for juveniles. *Buffalo Law Review*, 57, 1447-1513.
- Bottoms A. y Tankebe, J. (2012). Beyond procedural justice: A dialogic approach to legitimacy in criminal justice. *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 102 (1), 119-253.
- Caride Gómez, J. A. y Varela Crespo, L. (2015). La pedagogía social en la vida cotidiana de los jóvenes: problemáticas específicas y alternativas de futuro en un mundo globalizado. *Perspectiva educacional. Formación de profesores*, 54 (2), 150-164.
- Comité de los Derechos del Niño (2007). *Observación General n° 10. Los derechos del niño en la justicia de menores*. Ginebra: Naciones Unidas.
- Comité de los Derechos del Niño (2009). *Observación General n° 12. El derecho del niño a ser escuchado*. Ginebra: Naciones Unidas.
- Comité de los Derechos del Niño (2013). *Observación General n° 14. El derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial*. Ginebra: Naciones Unidas.
- Cordero Arce, M. (2015). Maturing children's rights theory. From children, with children, of children. *International Journal of Children's Rights*, 23 (2), 283-331.
- Dünkel, F. (2014). Juvenile Justice Systems in Europe. Reform developments between justice, welfare and 'new punitiveness'. *Kriminologijos studijos*, 1 (1), 31-76.
- Fagan, J. y Tyler, T. (2005). Legal socialization of children and adolescents. *Social Justice Research*, 18 (3), 217-242.
- Feld, B. (2006). Juveniles' Competence to exercise Miranda Rights: An empirical study of police and practice. *Minnesota Law Review*, 91 (26), 26-100.
- Fernández-Molina, E. (2008). *Entre la educación y el castigo. Un análisis de la justicia de menores*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Fernández-Molina, E. (2012). El internamiento de menores. Una mirada hacia la realidad de su práctica en España. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 14 (18), 1-20.
- Fernández-Molina, E. (2014). Repensando la justicia de menores. En F. Miró, J. R. Agustina, J. E. Medina y L. Summers (Eds), *Crimen, oportunidad y vida diaria. Libro homenaje al Profesor Dr. Marcus Felson* (pp. 613-647). Madrid: Dykinson.
- Fernández-Molina, E., Bermejo, M. R. y Baz, O. (2018). Percepciones de los jóvenes infractores sobre la justicia de menores. *Revista Española de Investigación Criminológica*, 16, 1-25.
- Fernández-Molina, E. y Bernuz, M. J. (2018). *Justicia de menores*. Madrid: Síntesis.
- Gargarella, R. (2012). Injusticia penal, justicia social. En R. Gargarella (Ed.), *El castigo penal en sociedades desiguales* (pp. 119-142). Buenos Aires: CIEPP.
- Gomá Lanzón, J. (2015). *Imitación y experiencia*. Madrid: Taurus.
- Grisso, T. y Schwartz, R. G. (2000). *Youth on Trial: A Developmental Perspective on Juvenile Justice*. Chicago: University of Chicago Press.
- Grisso, T., Steinberg, L., Woolard, J., Cauffman, E., Scott, E., Graham, S. y Schwartz, R. (2003). Juveniles' competence to stand trial: A comparison of adolescents' and adults' as trial defendants. *Law and Human Behaviour*, 27 (4), 333-366.
- Kilkelly, U. (2008). Youth courts and children's rights: the Irish experience. *Youth Justice*, 8 (1), 39-56.
- Kilkelly, U. (2010). *Listening to children about justice: Report of the Council of Europe consultation with children on child-friendly justice*. Estrasburgo: Consejo de Europa.
- Krappmann, L. (2010). The weight of the child's view (article 12 of the Convention on the Rights of the Child). *International Journal of Children's Rights*, 18, 501-513.
- Larrauri, E. (2015). *Introducción a la criminología y al sistema penal*. Madrid: Trotta.
- Monahan, K., Steinberg, L. y Piquero, A. (2015). Juvenile Justice Policy and Practice: A developmental perspective. *Crime and Justice*, 44 (1), 577-619.
- Ortega Ruiz, P. (2004). La educación moral como pedagogía de la alteridad, **revista española de pedagogía**, 62, (227) 5-30.
- Ortega Ruiz, P. y Romero Sánchez, E. (2013). La experiencia de las víctimas en el discurso pedagógico. *Teoría de la Educación*, 25 (1), 63-77.

- Pérez, F., Becerra, J. y Aguilar, A. (2018). Cómo perciben los menores infractores la justicia que se les aplica: un acercamiento desde la justicia procedimental. *Revista Española de Investigación Criminológica*, 16, 1-26.
- Peterson-Badali, M., Care, S. y Broeking, J. (2007). Young People's Perceptions and Experiences of the Lawyer-Client Relationship. *Canadian Journal of Criminology & Criminal Justice*, 49 (3), 375-402.
- Rap, S. (2013). *The participation of juvenile defendants in youth courts*. Utrecht: University Utrecht.
- Sprott, J. B. y Greene, C. (2010). Trust and confidence in the courts does the quality of treatment young offenders receive affect their views of the courts? *Crime & Delinquency*, 56 (2), 269-289.
- Steinberg, L. (2013). The influence of neuroscience on US Supreme Court decisions about adolescents' criminal culpability. *Nature Reviews Neuroscience*, 14 (7), 513-518.
- Steinberg, L. y Scott, E. S. (2003). Less guilty by reason of adolescence: developmental immaturity, diminished responsibility, and the juvenile death penalty. *American Psychologist*, 58 (12), 1009-1018.
- Tankebe, J. (2013). Viewing things differently: The dimensions of public perceptions of police legitimacy. *Criminology*, 51 (1), 103-135.
- Tyler, T. (2006). *Why people obey the law?* Chelsea: Yale University Press.
- Tyler, T. y Trinkner, R. (2017). *Why Children Follow Rules*. Oxford: Oxford University Press.
- Vandekerckhove, A. y O'Brien, K. (2013). Child-Friendly Justice: turning law into reality. *Europäische Rechtsakademie Academy*, 14, 523-541.
- Weijers, I. (2002). The Moral Dialogue: a Pedagogical Perspective on Juvenile Justice. En I. Weijers y A. Duff (Eds.), *Punishing juveniles. Principle and critique* (pp. 135-154). Oxford: Hart Publishing.
- Woolard, J. L., Harvell, S. y Graham, S. (2008). Anticipatory injustice among adolescents: age and racial/ethnic differences in perceived unfairness of the justice system. *Behavioral Sciences & the Law*, 26 (2), 207-226.

## Biografía de las autoras

**María José Bernuz Beneitez** es Doctora en Derecho, Profesora Titular de Filosofía del Derecho e Investigadora del Laboratorio de Sociología jurídica en la Universidad de Zaragoza. Su investigación sobre justicia de menores comenzó con la tesis doctoral y la ha continuado mediante proyectos nacionales y europeos sobre el tema (Youprev), así como con la colaboración con grupos de investigación en criminología en Albacete, Bruselas (VUB) y Oporto. Aparte de esta línea de investigación, también ha trabajado sobre políticas de seguridad, violencia de género o derechos de los animales.

 <https://orcid.org/0000-0001-7723-5172>

**Esther Fernández Molina** es Profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha. Directora del Centro de Investigación en Criminología y responsable del Grupo Consolidado de Investigación en Criminología y Delincuencia Juvenil de la Universidad de Castilla-La Mancha. Sus principales líneas de investigación son la justicia de menores, las tendencias delictivas de la delincuencia y las percepciones públicas sobre el delito (miedo al delito, actitudes hacia el castigo juvenil y actitudes hacia las instituciones penales).

 <https://orcid.org/0000-0002-3103-0232>

# Sumario\*

## Table of Contents\*\*

### Respuestas educativas y cívico-penales a los comportamientos antisociales

#### *Educational and civic-penal responses to antisocial behavior*

Editor invitado: Fernando Gil Cantero  
Guest editor: *Fernando Gil Cantero*

#### **Fernando Gil Cantero**

Presentación: Respuestas educativas y cívico-penales a los comportamientos antisociales

*Introduction: Educational and civic-penal responses to antisocial behavior*

209

#### **David Reyero, Fernando Gil Cantero**

La educación que limita es la que libera

*Education that limits is education that frees*

213

#### **María José Bernuz Beneitez, Esther Fernández Molina**

La pedagogía de la justicia de menores: sobre una justicia adaptada a los menores

*The pedagogy of juvenile justice: a child-friendly justice*

229

#### **Marina Martins, Carolina Carvalho**

¿En qué mienten los adolescentes?

*What do teenagers lie about?*

245

#### **Inmaculada Méndez, Cecilia Ruiz Esteban, Juan Pedro Martínez, Fuensanta Cerezo**

Ciberacoso según características sociodemográficas y académicas en estudiantes universitarios

*Cyberbullying according to sociodemographic and academic characteristics among university students*

261

#### **Irene Montiel, José R. Agustina**

Retos educativos ante los riesgos emergentes en el ciberespacio: claves para una adecuada prevención de la cibervictimización en menores

*Educational challenges of emerging risks in cyberspace: foundations of an appropriate strategy for preventing online child victimization*

277

#### **Maialen Garmendia Larrañaga, Estefanía Jiménez Iglesias, Nekane Larrañaga Aizpuru**

*Bullying y cyberbullying: victimización, acoso y daño.*

Necesidad de intervenir en el entorno escolar

*Bullying and cyberbullying: victimisation, harassment, and harm. The need to intervene in the educational centre*

295

#### **Ana Rosser-Limiñana, Raquel Suriá-Martínez**

Adaptación escolar y problemas comportamentales y emocionales en menores expuestos a violencia de género

*School adaptation and behavioural and emotional problems in minors exposed to gender violence*

313

\* Todos los artículos están también publicados en inglés en la página web de la revista: <https://revistadepedagogia.org>.

\*\* All the articles are also published in English on the web page of the journal: <https://revistadepedagogia.org>.

**Fanny T. Añaños-Bedriñana, Miguel Melendro, Rocío  
Raya Miranda**

Mujeres jóvenes con medidas de protección y  
judiciales y sus tránsitos hacia la prisión

*Young women with protective and judicial measures and their  
transit towards prison*

**333**

## **Reseñas bibliográficas**

**Esteban Bara, F.** *Ética del profesorado* (Juan  
García Gutiérrez). **García Amilburu, M., Bernal,**

**A. y González Martín, M. R.** *Antropología de la  
educación. La especie educable* (Yaiza Sánchez

Pérez). **Rose, D. y Martin, J. R.** *Leer para aprender.*

*Lectura y escritura en las áreas del currículo* (Francisco

Lorenzo Bergillos). **Buxarrais, M. R. y Vilafranca, I.**

**(Coords.).** *Una mirada femenina de la educación moral*

(Eric Ortega González).

**351**

## **Informaciones**

«ECER conference Education in an Era of Risk—the  
Role of Educational Research for the Future»—de la  
European Educational Research Association (EERA)—;

III Congreso «European Liberal Arts and Core Texts

Education»; VIII Congreso del Jubilee Centre for  
Character and Virtues: «Virtues and the Flourishing

Life»; XLV Congreso Internacional de AME 2019:

«Morality and Ethics for the Digital World»; III Premio

Ricardo Marín Ibáñez; **Una visita a la hemeroteca**

**(profesores youtubers)** (Daniel Pattier); **Una visita a**

**la red** (David Reyero).

**365**

## **Instrucciones para los autores**

Instructions for authors

**375**



ISSN: 0034-9461 (Impreso), 2174-0909 (Online)

<https://revistadepedagogia.org/>

Depósito legal: M. 6.020 - 1958

INDUSTRIA GRÁFICA ANZOS, S.L. Fuenlabrada - Madrid